

Serie DESAFÍOS - Cuadernillo 1

Inclusión y juventudes en América Latina y el Caribe



SERIE DESAFÍOS. Cuadernillo 1

Inclusión y juventudes en América Latina y el Caribe



Diseño y edición: www.innovahub.org

Copyright © 2023 Corporación Andina de Fomento (“CAF”), Organismo Internacional de Juventud (“OIJ”), y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (“PNUD”). Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons CC BY 3.0 IGO (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida con atribución CAF, OIJ y PNUD para cualquier propósito no comercial en su forma original o cualquier forma derivada, siempre que el trabajo derivado sea sujeto a la misma licencia bajo los mismos términos que la obra original. CAF, OIJ y PNUD no se responsabilizan por cualquier error u omisión que contengan trabajos derivados y no garantizan que tales trabajos derivados no infrinjan los derechos de terceros.

En alcance a la sección 8 de la licencia indicada, cualquier mediación relacionada con disputas que surjan bajo esta licencia será llevada a cabo de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras de CAF, OIJ, o PNUD que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI). El uso del nombre de CAF, OIJ, o PNUD para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo de CAF, OIJ, o PNUD requieren de un acuerdo de licencia adicional escrita entre CAF, OIJ y PNUD y el usuario y no es autorizado como parte de esta licencia.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones que forman parte integral de esta licencia.

Las opiniones expresadas y argumentos empleados en esta obra no necesariamente reflejan el punto de vista de los países accionistas de CAF, de los países miembros del OIJ, ni del PNUD.

Esta obra, como cualquier data o mapa que incluya, son sin perjuicio del estatus o soberanía sobre cualquier territorio, a la delimitación de fronteras internacionales y al nombre de cualquier territorio, ciudad, o área.

ÍNDICE

Pág.	
5	Agradecimientos
6	Prólogo
7	Lista de acrónimos
8	Nota para el lector
9	1- Introducción La inclusión y las juventudes en el marco de la Agenda 2030
12	2- Inclusión desafíos para las juventudes
12	2.1 Desafío 1: Menos brechas de acceso y más calidad para el logro de una educación pertinente e inclusiva.
23	2.2 Desafío 4: Menos precariedad y más oportunidades de empleo digno para el logro de una economía justa y sostenible.
29	2.3 Desafío 3: Menos riesgos de salud y más servicios de atención para el logro del bienestar físico y mental.
36	3- La mirada hacia el futuro soluciones y propuestas
36	3.1 Jóvenes hacia una educación pertinente y de calidad
36	3.1.1 Superar la crisis educativa y reinventar la educación después de la pandemia
37	3.1.2 Transformar la educación y reducir las brechas a través del aprendizaje digital
39	3.2 Jóvenes hacia una economía justa y sostenible
39	3.2.1 Aprovechar el bono demográfico y el potencial innovador de las juventudes para lograr un crecimiento económico inclusivo
40	3.2.2 Economía verde, digital y de cuidado al centro de las políticas de recuperación sensibles al género y las juventudes
43	3.3 Jóvenes hacia una salud integral y de calidad
43	3.3.1 Mayor atención a la salud de las y los jóvenes para reducir costos y beneficiar a toda la sociedad
44	3.3.2 Aprender de la pandemia y construir sistemas de salud más inclusivos y resilientes
47	4- Conclusiones y recomendaciones
53	Referencias bibliográficas

AGRADECIMIENTOS

Este informe fue elaborado de manera conjunta por un grupo de especialistas del **CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe**, el **Organismo Internacional de Juventud (OIJ)**, y el **Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)**. La coordinación estuvo a cargo de Paul Rodríguez (OIJ), Gabriela Nones (PNUD) y Alejandro Blancas (OIJ). Los cuadernillos fueron elaborados por Chiara Brunetti (Cuadernillo 1), Mónica Prieto (Cuadernillo 2), Nasha Cuello Cuvelier (Cuadernillo 3). Bibiam Diaz, Nathalie Gerbasi, Rafael Juliá, Antonio Palma, Cristina Sousa, Francisco Arellano, Raquel Santos, Rita Sciarra, Gloria Manzotti, Johanna Saenz, Romina Kasman, Adam Forbes, Felipe Bosch, Giulia Jacovella, Maria Sujkowska y Valentina Morales aportaron comentarios muy útiles.

Por favor cite esta publicación como: OIJ, CAF, PNUD “Desafío Inclusión y Juventud en LAC”. Serie Desafíos, Cuadernillo 1. 2023.

PRÓLOGO

Las personas jóvenes son uno de los grupos más significativos en los países iberoamericanos. En la actualidad, se estima que la región de América Latina y el Caribe alberga a aproximadamente 160 millones de personas jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 15 y 29 años, representando así un 25% de la población total de la región. Como parte de esta región compleja y desigual, es un hecho que las juventudes iberoamericanas muchas veces enfrentan desafíos y ven limitadas las posibilidades de experimentar a plenitud sus derechos en el presente y futuro.

Las personas jóvenes constituyen, asimismo, uno de los grupos clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, no sólo porque viven en primera persona y de forma específica las brechas que la agenda busca cerrar, sino también, porque en muchos casos, son quienes vienen impulsando con determinación la propia agenda, a través de su participación y la generación de escenarios y propuestas para el logro del Desarrollo Sostenible. La experiencia de los años recientes, y los retos que emergieron después de la pandemia del COVID-19, a partir de los esfuerzos hacia la recuperación, demandan de una mirada innovadora que facilite acciones integradas y el compromiso de los gobiernos y otros sectores (cooperación internacional, sector privado, la academia y la sociedad civil) para priorizar a la población joven y reconocer su liderazgo y contribución.

Como aporte a estos escenarios emergentes, a través de la alianza entre CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se ha construido esta Serie Desafíos, un formato de cuadernillos temáticos que constituye un paso más hacia la consolidación de una plataforma que articule el escenario internacional en torno al desarrollo de las personas jóvenes.

Para ello, en esta serie de cuadernillos se abordan los desafíos para las juventudes iberoamericanas en los ámbitos de Inclusión, Gobernabilidad y Medioambiente, a través de una ruta común que aborda, por un lado, un mapeo de la realidad de las juventudes iberoamericanas analizando los desafíos más notorios y recabando la evidencia que los representa de manera detallada y actualizada. Por otro lado, identificando e impulsando las experiencias, conocimientos y saberes que la juventud articulada y reticulada está creando e implementando en favor de sí misma. Y, finalmente, los cuadernillos proponen recomendaciones orientadas a fortalecer la institucionalidad en juventud, reconociendo la necesidad de actualizar sus estruc-

turas, planes y programas para poder dar mejor respuesta y representación de la fotografía de las personas jóvenes iberoamericanas.

Tanto las personas jóvenes como las instituciones están buscando tender puentes de comunicación y articulación a través de los cuales impulsar acciones innovadoras y efectivas para habilitar los caminos del desarrollo que plantean los desafíos. La Agenda 2030 brinda un escenario inigualable para estructurar este trabajo conjunto y para generar alianzas clave que logren ubicar a la juventud en el panorama internacional con la relevancia que merece.

Así, la presente Serie Desafíos, a través del análisis temático de cada cuadernillo que la compone, se constituye en una iniciativa que busca consolidar una plataforma de cooperación global para el desarrollo juvenil basada en la generación de conocimiento y el intercambio de saberes y experiencias. Atendiendo al compromiso de CAF, OIJ y PNUD con las juventudes, las páginas que siguen -y sus recomendaciones finales- sugieren escenarios evidentes de oportunidades interconectadas para generar iniciativas innovadoras que den respuesta a los múltiples y complejos desafíos.

Christian Asinelli.
Vicepresidente Corporativo de
Programación Estratégica
CAF -banco de desarrollo de
América Latina y el Caribe-

Max Trejo Cervantes.
Secretario General
Organización Internacional
de Juventud para
Iberoamérica (OIJ)

Linda Maguire.
Directora Regional Adjunta
del Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para
América Latina y el Caribe.

LISTA DE ACRÓNIMOS

ALC: América Latina y el Caribe

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

ECOSOC: Consejo Económico y Social

CIDJ: Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes

JPS: Agenda de Juventud, Paz y Seguridad

KAS: Fundación Konrad Adenauer

MPS: Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIJ: Organismo Internacional de la Juventud

OIT: Organización Internacional del Trabajo

OOJ: Organismos Oficiales de Juventud

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil

RCSNU 2250 (2015): Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SNU: Sistema de las Naciones Unidas

UIP: Unión Interparlamentaria

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

NOTA AL LECTOR

Como apoyo previo a la lectura, las autoras y el equipo revisor y editor de la presente Serie Desafíos, quisiéramos advertir acerca de los alcances del análisis que exponen los cuadernillos en torno a los desafíos de Inclusión, Gobernabilidad y Medioambiente para las juventudes de ALC. Reconocemos limitaciones en el abordaje de varios de los elementos y sub-desafíos planteados, sobre todo a nivel de soporte cuantitativo de las brechas y a nivel de desagregación de datos que profundicen los análisis.

Estas limitaciones se deben a la falta de datos desagregados por grupo etéreo, género, diversidad y sectores específicos que permitan conocer mejor la situación de las juventudes de ALC. En línea con uno de los grandes objetivos de la Serie Desafíos, el de generar evidencia para nutrir el análisis de las realidades que viven las juventudes, planteamos de entrada esta situación y la necesidad de comenzar a estudiar en profundidad y con precisión el panorama de las y los jóvenes a la luz de las problemáticas planteadas en los cuadernillos.

Cada cuadernillo destaca en sus recomendaciones el tipo de datos que recomienda comenzar a generar para profundizar el análisis y que, de ese modo, las recomendaciones emitidas para avanzar en los planes y políticas de juventud estén mejor perfiladas y enfocadas hacia acciones más pertinentes y que nos permitan avanzar de manera efectiva en la Agenda 2030 y el logro de los ODS, para que, efectivamente, no dejemos a las juventudes atrás.

1. Introducción | La inclusión y las juventudes en el marco de la Agenda 2030



En esta década de aceleración hacia la concreción de la **Agenda 2030**, la **inclusión de la juventud de América Latina y el Caribe es imprescindible**. A pesar de los avances en las condiciones de vida en muchos países, las personas jóvenes de la región han liderado movimientos sociales exigiendo mayores niveles de inclusión debido a la persistente desigualdad que se manifiesta en diversos ámbitos. La pandemia de la COVID-19 ha generado una crisis social significativa y un deterioro de los índices de bienestar de toda una generación, lo cual ha implicado retrocesos en términos de inclusión multidimensional de las personas jóvenes, con graves consecuencias para el logro de los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** antes del 2030. La inclusión de las juventudes en las políticas de reconstrucción es un factor determinante para abordar los impactos sociales y económicos de la crisis y poder cumplir con el principio de **“no dejar a nadie atrás”**.

La inclusión de las personas jóvenes en la sociedad se debe comprender desde una perspectiva multidimensional e integral, que considere los ámbitos de la educación, el empleo, la salud, la cultura, la violencia y la participación política (Cepal, 2021). Según la Cepal (2017), el concepto de inclusión “remite a un proceso de mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas para la plena participación de las personas en la sociedad, que tiene tanto dimensiones objetivas como de percepciones”. El Departamento de Asuntos Económi-

cos y Sociales de las Naciones Unidas (*DAES, 2017*) define la inclusión social como “el proceso de mejorar las formas de participación en la sociedad, en particular la de aquellas personas desfavorecidas por razones de edad, sexo, discapacidad, raza, etnicidad, origen, religión o condición socioeconómica, a través de mayores oportunidades, acceso a recursos, expresión de su voz y respeto de sus derechos”. La inclusión es también uno de los valores claves del desarrollo humano y del enfoque de las capacidades de Amartya Sen y Nussbaum (UNDP, 2013), por lo cual el bienestar de las personas jóvenes aumenta en función de sus capacidades y oportunidades de lograr lo que ellas consideran valioso. Bajo este enfoque, la inclusión busca garantizar la participación plena y equitativa de todas las personas en la sociedad, sin importar sus características o circunstancias particulares, y superar las barreras que impiden el acceso igualitario a oportunidades, recursos y derechos fundamentales. En este cuadernillo, pese a adoptar una mirada multidimensional e integral del concepto de inclusión, el análisis se focalizará en la inclusión económica y social, profundizando las brechas que experimentan las personas jóvenes en los ámbitos de la educación, el empleo y la salud¹.

Actualmente, las personas jóvenes representan uno de los grupos más significativos dentro de la población de la región, ya que constituyen aproximadamente un 20% de la población total, lo cual deja en evidencia la importancia de invertir en su inclusión social y económica como uno de los pilares fundamentales para lograr un desarrollo sostenible equitativo (*Cepal, 2021a*). Es necesario brindar igualdad de oportunidades y capacidades a las personas jóvenes adoptando un enfoque basado en sus derechos. En América Latina y el Caribe (ALC), la desigualdad afecta severamente a las personas jóvenes entre los 15 y los 29 años y está marcada por brechas y discriminaciones relacionadas con ingreso, etnia y raza, edad, género, territorio, condición de discapacidad, condición migratoria y logros educativos, entre otros aspectos. A pesar de los avances significativos que la región ha logrado al implementar estrategias para reconocer, abordar y reducir estas desigualdades, aún queda mucho por hacer, especialmente tras las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia.

De acuerdo con datos del Observatorio de Juventud para América Latina y el Caribe, en la región, aproximadamente dos de cada diez jóvenes de 15 a 24 años no forma parte del sistema educativo ni del mercado laboral (*Juvelac, 2019*). El acceso universal a una educación de calidad, inclusiva y equitativa y la promoción de oportunidades de aprendizaje permanente para todos es un derecho fundamental de la juventud. Sin embargo, en ALC todavía existen

¹. Para los ámbitos de participación, seguridad, véase OIJ, CAF, PNUD “Desafío Gobernabilidad y Juventud en LAC”. Serie Desafíos, Cuadernillo 2. 2023”. Para los temas de inclusión ambiental, véase OIJ, CAF, PNUD “Desafío Medioambiente y Juventud en LAC”. Serie Desafíos, Cuadernillo 3. 2023”.

profundas disparidades en este sector, especialmente en los niveles educativos secundario y terciario, esenciales para una transición exitosa al mercado laboral y para lograr un trabajo digno. Además, según el informe de CAF “Desigualdades heredadas. El rol de las habilidades, el empleo y la riqueza en las oportunidades de las nuevas generaciones.”, esta situación está muy determinada por el contexto socioeconómico familiar, ya que las brechas en la culminación de ciclos y los aprendizajes son en buena parte “heredadas” (De La Mata et. al, 2022). Para los jóvenes, también las cuestiones del desempleo, el subempleo y el empleo de mala calidad han demostrado ser persistentes y desalentadoras. Las personas jóvenes en la región tienen tres veces más probabilidades de estar desempleadas que las adultas, con una tasa de desempleo juvenil de casi el 20% (OIT, 2022). En números absolutos, son más de 10 millones de jóvenes que buscan empleo sin conseguirlo. Muchas personas jóvenes se dedican a un trabajo mal remunerado, precario o informal. (Berniell, L. et. al, 2016).

Así mismo, los datos disponibles indican que las personas jóvenes tienen un acceso más restringido a los servicios preventivos y curativos en el ámbito de la salud (*Sansahueza et al., 2022*). América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo. En todos estos aspectos existen brechas de género, de condición socioeconómica, de territorio (urbano, rural) y de condición étnico-racial (principalmente poblaciones indígenas y afrodescendientes). Lo mismo pasa con otros grupos vulnerables o marginados como personas con discapacidad, refugiados, migrantes o personas **LBTGQI+**.

El desafío de la inclusión social y económica de la juventud se ve reflejado claramente en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que hace un llamado a atender a la población joven en los aspectos educativo, laboral y sanitario, entre otros, y establece compromisos sólidos con respecto a la diversidad de las juventudes, garantizando su acceso a los derechos y su capacidad para ejercerlos plenamente. El bienestar de los jóvenes está estrechamente relacionado con la erradicación de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición, la reducción de la desigualdad, la creación de sistemas de protección social universales, la igualdad de género, el acceso a la salud y la educación, la promoción de economías sostenibles y un medioambiente protegido, el acceso a empleos dignos y la construcción de sociedades más pacíficas y transparentes. La inclusión como eje orientador de la Agenda 2030 queda plasmada también en el llamado a “**no dejar a nadie atrás**” en la senda del desarrollo, uno de los tres principios orientadores, junto con los de universalidad e integralidad. Para el análisis de los tres desafíos de este documento, se hará referencia a los ODS más directamente relacionados con el logro de la inclusión económica y social de las personas jóvenes de la región, a saber: ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 3 (salud y bienestar), ODS 4 (educación de calidad), ODS 5 (igualdad de género), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y ODS 10 (reducción de las desigualdades).

Inclusión y juventudes



DESAFÍO 1

Educación pertinente y de calidad

- Acceso
- Calidad
- Habilidades para el trabajo

DESAFÍO 2

Empleo digno

- Desempleo
- Informalidad
- Inactividad



DESAFÍO 3

Salud integral y bienestar

- Salud mental y emocional.
- Abuso de sustancias.
- Salud Sexual y Reproductiva y Embarazo adolescente no deseado.

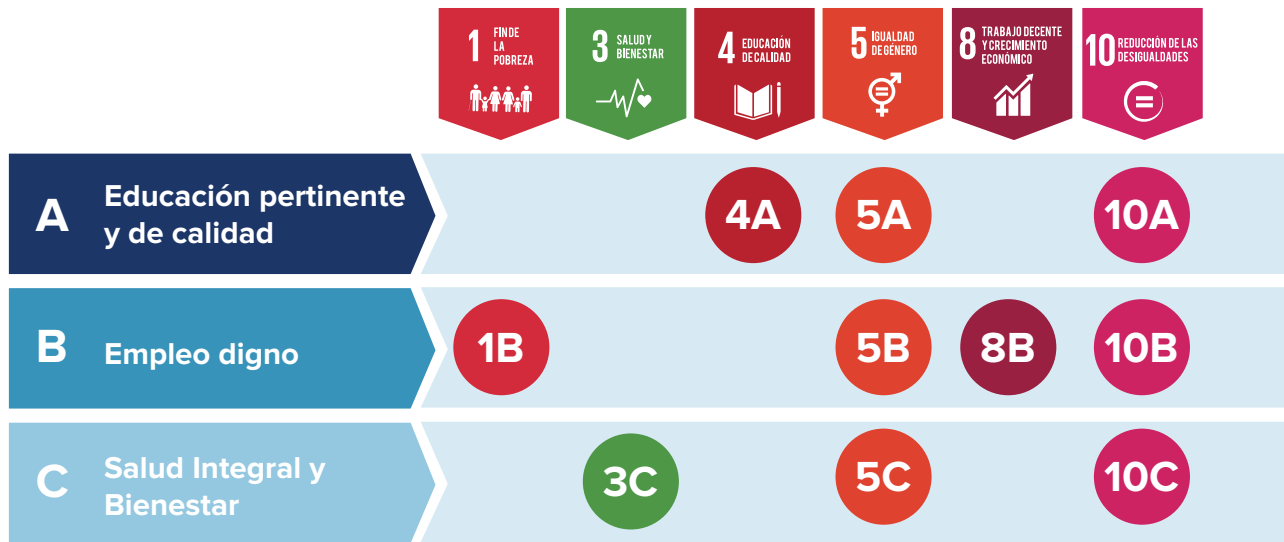
Gráfico 1. El desafío de inclusión de las juventudes en América Latina y el Caribe

Es evidente que las personas jóvenes pueden ofrecer soluciones innovadoras para abordar los desafíos de la implementación de la Agenda 2030 y acelerar su realización, siendo agentes clave para la promoción del desarrollo sostenible y la construcción de un futuro más inclusivo y equitativo. La Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud “Juventud 2030” lanzada en 2021 por el Secretario General António Guterres², sirve como marco general para guiar las acciones de todo el sistema de las Naciones Unidas y tiene como objetivo promover medidas más amplias a nivel global, regional y nacional para atender las necesidades de las y los jóvenes en toda su diversidad, fomentar su capacidad de acción, promover sus derechos y garantizar su participación en la implementación, revisión y seguimiento de la Agenda 2030 y otros marcos globales pertinentes.

Este cuadernillo se estructura en cuatro partes. Después de esta introducción, la segunda sección analiza los principales desafíos para la juventud en términos de inclusión: asegurar una educación inclusiva, pertinente y de calidad, el acceso a un empleo digno y a un sistema de salud integral y de calidad. Cada desafío se analiza bajo los aspectos más relevantes en términos de inclusión para las personas jóvenes. Para el desafío de educación, se profundiza el tema del acceso y la cobertura, la calidad educativa y las habilidades para la transición de la educación al trabajo. Para el tema de empleo, se analiza el nivel de desempleo juvenil, la informalidad y la situación de las personas jóvenes que ya no forman parte del sistema educativo, pero que tampoco han logrado insertarse en el mercado laboral. En el tema de salud, se analizan tres aspectos críticos para la inclusión juvenil en la región, a saber, la salud mental, el abuso de sustancias y el embarazo adolescente. En la tercera sección, se presentan, por cada desafío, las principales oportunidades y algunas experiencias destacadas de la región. El objetivo de este análisis es mostrar soluciones y propuestas desde y para la juventud, evidenciando su papel clave para lograr los objetivos de desarrollo al 2030 y construir sociedades más sostenibles, inclusivas y estables. El documento termina con unas conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados del análisis y que, se espera, sirvan de orientación para promover políticas públicas a favor de una mayor inclusión de las juventudes latinoamericanas y caribeñas.

². <https://news.un.org/es/story/2018/09/1442212>

Relación entre los ODS y los desafíos en inclusión para las juventudes de ALC



- 1B**
 - 1.1 Erradicación de la pobreza extrema.
 - 1.2 Reducción de la pobreza relativa en todas sus dimensiones.
 - 1.3 Implantación de sistemas de protección social.
 - 1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos financieros.
- 3C**
 - 3.1 Reducción de la tasa de mortalidad materna.
 - 3.2 Eliminar la mortalidad infantil.
 - 3.3 Poner fin a las enfermedades transmisibles.
 - 3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y salud mental.
 - 3.5 Prevención y tratamiento de abusos de drogas y alcohol.
 - 3.7 Garantía de acceso a la salud sexual y reproductiva, y a la planificación familiar.
 - 3.8 Lograr la cobertura universal y acceso a medicamentos.
- 4A**
 - 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.
 - 4.3 Asegurar el acceso igualitario a la formación superior.
 - 4.4 Aumento de las competencias para acceder al empleo.
 - 4.5 Eliminación de disparidad de género y colectivos vulnerables.
 - 4.6 Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética.
 - 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.
 - 4.B Aumento de becas para la enseñanza superior.
- 5A**
 - 5.1 Poner fin a la discriminación
 - 5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el empoderamiento.
- 5B**
 - 5.4 Reconocer el trabajo de cuidados y doméstico.
 - 5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad oportunidades.
 - 5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos económicos.
- 5C**
 - 5.1 Poner fin a la discriminación.
 - 5.6 Asegurar el acceso a salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos.
- 8B**
 - 8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa.
 - 8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente.
 - 8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios.
 - 8.B Desarrollo de la estrategia mundial para empleo juvenil.
- 10A**
 - 10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y política.
 - 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades.
- 10B**
 - 10.1 Crecimiento de Ingresos del 40% población pobre.
 - 10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y política.
 - 10.4 Adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social.
- 10C**
 - 10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y política.

Gráfico 2. Inclusión y ODS para las juventudes en ALC

2. Inclusión I Desafíos para las juventudes



2.1 Desafío 1: Menos brechas de acceso y más calidad para el logro de una educación pertinente e inclusiva

La educación inclusiva, equitativa y de calidad es una herramienta clave para lograr la inclusión integral de las personas jóvenes en la sociedad, lo cual genera impactos positivos en diversas áreas del desarrollo sostenible. Genera oportunidades para nuevas trayectorias laborales, fomenta la movilidad social y el desarrollo económico y productivo, y ayuda a superar la desigualdad y la pobreza de forma permanente (Celhay y Gallegos, 2023). Asimismo, brinda conocimientos e información necesarios para tomar decisiones informadas sobre salud y sexualidad, y para que las y los jóvenes sean ciudadanos activos e informados, contribuyendo así al fortalecimiento de las democracias. También fomenta la valoración de la diversidad y promueve patrones de consumo sostenibles. Todos estos aspectos convergen en la consecución de la Agenda 2030 y sus objetivos.

La crisis social provocada por la pandemia exige poner atención al fortalecimiento de las capacidades humanas en el mediano plazo para superar el impacto que la misma ha tenido en el sector educativo. Las consecuencias de la interrupción muy prolongada de la educación presencial en la región y sus repercusiones en la pérdida de aprendizaje no fueron abordadas como parte de la respuesta inmediata frente a la crisis, lo que ha profundizado las desigualdades educativas preexistentes (*Cepal, 2022*) y (*Arreaza, A., 2023*). Con relación a este desafío, se han identificado tres aspectos clave que influyen directamente en la inclusión educativa de las juventudes en la región, los cuales serán analizados a continuación: el acceso y permanencia en la educación, la calidad educativa y la adquisición de las habilidades técnicas para la transición de la educación al trabajo.

En América Latina y el Caribe se han logrado avances significativos en términos de cobertura y retención escolar, lo que ha resultado en que la generación actual de jóvenes sea la más educada en la historia de la región (*Cepal, 2022a*). A pesar de este innegable progreso, todavía existen desafíos pendientes, siendo uno de los principales las disparidades de acceso que se observan a medida que se avanza en el ciclo educativo. Si bien se ha avanzado en el acceso a la educación, este progreso se ha concentrado principalmente en la etapa inicial del ciclo educativo. En este sentido, se ha logrado una convergencia en altos niveles de finalización de la educación primaria, llegando prácticamente a la universalización para todos los grupos (96,4%), sin importar el género o el nivel de ingresos (*SEDLAC, 2022*).

Asimismo, se observa un aumento en la finalización de la educación secundaria en el período comprendido entre 2002 y 2021, año en el que el 66% de las personas de 20 a 24 años habían completado este nivel educativo (*Cepal, 2022a*). Sin embargo, a pesar de esta mejora, aún existen brechas significativas, sobre todo en términos de área geográfica, género y nivel de ingreso: en 2021 el 74% de las mujeres jóvenes y el 68% de los hombres jóvenes en áreas urbanas completan el ciclo secundario, en comparación con el 54% de las mujeres y 50% de los hombres en áreas rurales. Igualmente, si consideramos el nivel de ingresos, se pasa de un 21% de asistencia escolar de las y los jóvenes entre 20 y 24 años para el primer quintil de ingreso per cápita del hogar a un 51,5% de los jóvenes del quinto quintil. También existen brechas en el acceso y conclusión de los ciclos educativos entre los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes. Esto se debe, por un lado, a la falta de enfoque intercultural en los contenidos, metodologías y políticas educativas, a los déficits en la formación docente y, por otro lado, a la insuficiente infraestructura, servicios básicos, conectividad digital y equipamiento.

La discapacidad es otro factor determinante al intentar acceder a la educación primaria, secundaria y terciaria, pues las barreras de accesibilidad física y digital, comunicacionales, legales y

sobre todo actitudinales constituyen limitantes que impiden la plena participación de personas jóvenes con discapacidad en estos espacios. La falta de recursos también influye en este sentido, ya que se calcula que una de cada cinco personas que viven en pobreza extrema tienen alguna condición de discapacidad y siete de cada diez hogares donde vive una persona con discapacidad son propensos a caer en pobreza extrema.

Las disparidades en la conclusión de la educación secundaria alta revelan y perpetúan desigualdades en la inclusión de las juventudes, relacionadas con el género, el área geográfica y el origen étnico y racial, que son elementos clave en la matriz de desigualdad social de la región (Auricchio B., 2023). Aunque las mujeres jóvenes superan a los hombres jóvenes en términos de conclusión de la secundaria por seis puntos porcentuales, no experimentan mejores empleos y salarios una vez que ingresan al mercado laboral, lo cual refleja la influencia de patrones culturales patriarcales y discriminación estructural a lo largo de su educación (Cepal, 2022). Un estudio del Banco Mundial efectuado en ocho países de la región da cuenta de que la principal razón de abandono de este nivel educativo, mencionada por las y los jóvenes que integran este grupo, es que “no tenían interés, o no les interesaba lo que aprendían en la escuela”, lo que abre el interrogante sobre la pertinencia de los contenidos impartidos. (Székely, 2015).

En poblaciones jóvenes que se encuentran en desplazamiento, en muchas ocasiones, la permanencia dentro del sistema educativo se condiciona por las circunstancias socioeconómicas complejas del hogar, las cuales los impulsan a salir para generar un medio de vida, sumado a la ausencia de documentación o regularización, que dificulta el acceso o la obtención de diplomas al final de sus estudios. Todo esto se agrava aún más con las poblaciones en tránsito, dado que, en muchas ocasiones, el ingreso al sistema educativo no es una de las prioridades del grupo familiar en vista de las múltiples carencias que enfrentan (Unesco, 2019).

El acceso a la educación terciaria, que incluye la oferta educativa postsecundaria, universitaria y técnico-profesional, había aumentado bastante en América Latina y el Caribe antes del inicio de la pandemia. En la región, la tasa bruta de cobertura casi se duplicó entre 2000 y 2010, al pasar del 23% al 41% en solo diez años, mientras que entre 2010 y 2020 el crecimiento se mantuvo a un ritmo menor, de tal modo que la tasa de cobertura alcanzó un 54% en 2020 (UIS.stat, 2023). A pesar de estos avances, persisten desafíos importantes como el aumento de la brecha de acceso en función del nivel socioeconómico de la población, ya que la ampliación del acceso a la educación superior en los últimos años ha favorecido, en particular, a los sectores medios y altos. Además, tal y como en el caso de la educación secundaria, aunque las mujeres están alcanzando mayores niveles de acceso a la educación superior que los hombres, ellas presentan una menor cobertura en las carreras de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y

matemáticas (CTIM), menores salarios y una menor participación en los puestos directivos, de liderazgo y académicos. Otro gran desafío en la región es asegurar que las personas jóvenes que ingresan a programas de educación superior logren completar sus estudios. Actualmente, aproximadamente el 40% de las y los estudiantes que acceden a la educación superior en la región no logran graduarse y, quienes lo logran, tardan, en promedio, un 36% más de tiempo esperado en completar sus programas de estudio, lo que aumenta los costos previstos de su formación (SEDLAC, 2022). Este limitado acceso o permanencia a la educación terciaria se agrava debido a ciertas circunstancias de las personas jóvenes, como en el caso de lo relacionado con condiciones de desplazamiento, pues solo el 6 % de ellas logra acceder al nivel terciario, frente al 40% de aquellos que no se encuentran en desplazamiento (ACNUR, 2023).

Pese al crecimiento significativo en los niveles de enseñanza preprimaria y educación superior, todavía existen desafíos importantes en términos de inclusión. Antes de la pandemia, ya se observaban brechas preocupantes en la calidad educativa y los resultados del aprendizaje de las y los estudiantes. En el nivel primario, los logros de aprendizaje en la región son bajos: en 2019, en el promedio de los países evaluados, solo el 54,6% de los estudiantes alcanzan el nivel mínimo de competencia en lectura y el 50,9% lo alcanza en matemáticas en tercer grado. En sexto grado, el porcentaje se reduce a un 31,3% en lectura y un 17,2% en matemáticas (Naciones Unidas, 2023). En el nivel secundario, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) en diez países de la región ALC revelan que, aproximadamente, la mitad de las y los estudiantes de 15 años alcanzan los niveles mínimos de competencia en lectura, y una proporción aún menor lo logra en ciencias y matemáticas. Los resultados muestran que el promedio de la región apenas ha cambiado entre 2015 y 2018 en estas áreas (Naciones Unidas, 2023).

América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que, durante la emergencia de la COVID-19, interrumpió las clases presenciales por períodos más prolongados, lo que ha supuesto la discontinuidad de los estudios o un acceso por vía remota para una generación de estudiantes durante dos años académicos. Esto, a su vez, ha generado brechas en el desarrollo de habilidades, pérdida de oportunidades de aprendizaje y riesgo de aumento del abandono escolar (OIT, 2020), (Berniell, L. et al., 2021). Según los resultados de la Encuesta Mundial sobre los jóvenes y la pandemia de la COVID-19, de las y los estudiantes que experimentaron el cierre de las escuelas, uno de cada ocho (el 13%) se quedó sin acceso a la enseñanza, en particular las personas jóvenes que viven en países de ingresos más bajos, lo cual pone de relieve las enormes brechas digitales que existen entre países y regiones. Pese a los esfuerzos de las instituciones de formación para asegurar la continuidad a través del aprendizaje en línea, el 65% de los jóvenes indicaron que habían aprendido menos desde el inicio de la pan-

demia, el 51% creía que su educación se retrasaría y el 9%, que se vería menoscabada o fracasaría (OIT, 2020). Esto se debe a varios factores, entre los cuales está una limitada conexión a internet —tres de cada diez personas no acceden a Internet en América Latina y el Caribe— (Banco Mundial, 2023), falta de equipamiento o de habilidades digitales, sea de estudiantes o de profesores, cambio de prioridades en el hogar con un aumento de las tareas domésticas o necesidad de ganar dinero para la familia y problemas de salud mental provocados por el aislamiento. Las personas jóvenes de las zonas rurales, las comunidades indígenas y migrantes, así como las y los jóvenes con discapacidad, se encuentran entre los que tienen menos probabilidades de aprendizaje digital y un riesgo aún mayor de abandono escolar (CAF, 2021).

En directa relación con la calidad de la educación, se evidencia un profundo grado de desconexión entre la formación que ofrece el sistema educativo y las habilidades requeridas por el sector productivo. América Latina y el Caribe, en comparación con otras regiones emergentes, es la que registra mayores dificultades en relación con las calificaciones demandadas por el mercado, con un 36% de empresas del sector formal que declara tener problemas para encontrar una fuerza laboral adecuadamente formada. Las empresas que requieren competencias especializadas o sofisticadas, particularmente, enfrentan mayores dificultades. Esto plantea un desafío significativo, considerando que estos sectores podrían ser clave para la transformación estructural de la región, cuya economía se basa principalmente en industrias de bajo valor agregado y baja productividad.

La educación primaria y secundaria de calidad debe complementarse con una educación técnica, profesional y terciaria asequible que proporcione a las y los jóvenes habilidades funcionales y transversales, fundamentales para el empleo y el espíritu empresarial. La educación superior, que abarca programas de formación técnico-profesional y universitarios, conlleva beneficios significativos tanto a nivel personal, para las personas jóvenes que logran alcanzar este nivel educativo, como para la sociedad en su conjunto. A pesar de su creciente importancia estratégica dentro de la oferta formativa superior, la enseñanza y la formación técnica y profesional (EFTP) ocupa todavía un bajo porcentaje de jóvenes en la región y preocupa la variabilidad en la calidad de la formación y su débil articulación con el mercado laboral. Hay pocos datos disponibles sobre el acceso de los estudiantes a la formación profesional, sin embargo, los datos existentes muestran que la participación general en la formación no formal y formal como la EFTP y la educación terciaria cae por debajo del 10% en la mayoría de los países de ALC (Unesco, 2021). Además, se observa un mayor ingreso a la EFTP de una población de menor nivel socioeconómico que, tradicionalmente, ha sido excluida del sistema educativo formal o se ha visto imposibilitada para alcanzar niveles avanzados en este.

Los conocimientos básicos en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) también son bajos en toda la región. En la actualidad, una educación de calidad y pertinente debe incluir necesariamente la trasmisión de conocimientos y habilidades en las tecnologías digitales, por lo cual, sin duda, las personas jóvenes tienen una ventaja por su mayor cercanía y frecuencia en el uso de este tipo de herramientas. Pero la inclusión digital de la juventud también presenta importantes brechas en términos de área geográfica, que es menor en las zonas rurales o marginadas, y de nivel socioeconómico, que es mayor para los jóvenes que viven en países de ingresos altos (Cepal, 2022a). La pandemia ha expuesto esta realidad de forma muy nítida.

A pesar de las medidas gubernamentales para mitigar estas desigualdades, como proporcionar tecnología y apoyo financiero a hogares de bajos recursos, el prolongado cierre escolar y los efectos económicos de la pandemia tendrán graves consecuencias educativas y laborales para las generaciones afectadas, conocidas como el “efecto cicatriz”, que reducirá sus ingresos y bienestar a corto, mediano y largo plazo (Cepal, 2022). Es crucial aprovechar esta crisis para transformar los sistemas educativos: además de mantener la apertura segura de las escuelas, se deben invertir recursos en estrategias para evaluar las pérdidas por falta de educación presencial, tanto en aprendizaje como en bienestar emocional.

Este breve análisis en relación con el progreso del **ODS 4** muestra claramente que todavía queda mucho por hacer para lograr una educación inclusiva e igualitaria para las juventudes. A pesar de los avances en el acceso, la cobertura y la calidad en la región, persisten importantes desigualdades socioeconómicas, de género, condición étnico-racial, lugar de residencia, discapacidad y condición migratoria, que comprometen la inclusión de las personas jóvenes a una educación de calidad y, consecuentemente, a obtener un mayor bienestar, fuera de la pobreza y con oportunidades de trabajo decente.

Desafío 1: Educación pertinente y de calidad

ACCESO

Finalizan la primaria **96%** de estudiantes, la secundaria el **68%** y la superior el **54%**.



- Efecto pandemia: el **13%** de estudiantes se quedó sin acceso a aprendizaje a distancia digital.
- **74%** de las mujeres jóvenes y el **68%** de los hombres jóvenes en áreas urbanas completan el ciclo secundario, en comparación con el **54%** de las mujeres y **50%** de los hombres en áreas rurales distancia digital.

CALIDAD

Educación primaria y secundaria: el **50%** de los jóvenes no alcanza el nivel mínimo en lectura y matemáticas.



Educación superior:

- Solo el **60%** logra graduarse
- Tardan el **36%** más de tiempo de lo programado.

Efecto pandemia: acerca del aprendizaje digital, el **65%** de los jóvenes indicaron que habían aprendido menos desde el inicio de la pandemia, el **51%** creía que su educación se retrasaría y el **9%**, que se vería menoscabada o fracasaría

Gráfico 3. Desafío 1: educación pertinente y de calidad

Habilidades para el trabajo

El 36% de empresas del sector formal declara tener problemas para encontrar una fuerza laboral adecuadamente formada.



La participación general en la formación no formal y formal como la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) y la educación terciaria cae por debajo del 10% en la mayoría de los países de ALC.

Aunque las mujeres obtengan mejores resultados:

- No obtienen mejores empleos o salarios.
- Ni más puestos directivos o de liderazgo.
- Tienen menor cobertura en las carreras de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.



Gráfico 3. Desafío 1: educación pertinente y de calidad

2.2 Desafío 2: Menos precariedad y más oportunidades de empleo digno para el logro de una economía justa y sostenible

La falta de buenas oportunidades de empleo es uno de los factores que más dificultan la inclusión de los jóvenes en las sociedades latinoamericanas y caribeñas. De acuerdo con las últimas estimaciones de la OIT, en América Latina y el Caribe hay 9,4 millones de personas jóvenes desempleadas, 23 millones que no estudian ni trabajan ni están en capacitación, y más de 30 millones que solo consiguen empleo en condiciones de informalidad. La pandemia de la COVID-19 ha agravado los desafíos existentes en la región: durante el período comprendido entre 2019 y 2021, las y los jóvenes entre 15 y 24 años experimentaron una mayor pérdida de empleo en comparación con las personas adultas. Muchas personas jóvenes abandonaron la fuerza laboral o tuvieron dificultades para ingresar a ella debido a las medidas de cierre y confinamiento impuestas por los gobiernos, y al cierre de las empresas causado por las pérdidas masivas sufridas por el sector privado. Como resultado, el número ya elevado de jóvenes sin empleo, educación o formación aumentó aún más en 2020 (*ILO, 2022*). Por primera vez en la historia, el valor del Índice de Desarrollo Humano mundial disminuyó en el 90 % de los países en 2020 o 2021. Esto tendrá un enorme impacto en términos de pobreza en las futuras generaciones (*PNUD, 2023a*).

A pesar del aumento de los niveles educativos y de ingresos de los jóvenes en los últimos años, la tasa de desempleo juvenil en América Latina y el Caribe sigue siendo el triple que entre la población adulta y mantiene niveles preocupantes: en 2021 llegó al 19,2% contra el 7,3% de las personas adultas (*Naciones Unidas, 2023*). El efecto de la pandemia sobre la pérdida inicial de empleo ha sido proporcionalmente más alto entre las y los jóvenes. Aunque tanto las personas jóvenes como las adultas experimentaron contracciones similares en términos de puntos porcentuales (una caída de alrededor de 11 puntos porcentuales), esto tuvo un impacto más fuerte en las jóvenes, debido a su tasa de ocupación más baja. Este comportamiento desfavorable se debe tanto al alto grado de informalidad entre los jóvenes ocupados menores de 25 años como al peor desempeño que mostraron en todas las ocupaciones durante la primera mitad de 2020 (*OIT, 2021*).

Las mujeres jóvenes, a pesar de sus mejores resultados educativos, registran un nivel de desempleo más alto que los hombres jóvenes —en 2021, 23,9% y 16,1% respectivamente— y han sufrido un impacto negativo en las tasas de empleo como consecuencia de la crisis. Las razones de esto incluyen la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado, que se profundizó durante la emergencia, pero también la fuerte presencia de mujeres en algunos sectores muy afectados (*ILO, 2020*). Las diferencias entre hombres y mujeres jóvenes se man-

tienen o, incluso, aumentan en algunos países durante la edad adulta. Las más afectadas son las mujeres más vulnerables: las que viven en zonas rurales, con menor nivel educativo, con hijos o con ingresos más bajos, migrantes o en alguna condición de discapacidad (*OECD et al., 2016*). Asimismo, las tasas de desempleo son considerablemente más altas entre las personas jóvenes de menor edad, menos cualificadas y procedentes de entornos más desfavorecidos. Las y los jóvenes pobres y vulnerables tienen el doble de probabilidades de experimentar el desempleo que las personas jóvenes menos vulnerables (*OECD et al., 2016*).

Durante la fase de recuperación, las personas jóvenes regresaron al empleo de manera más rápida que las adultas. Esto se relaciona con el comportamiento de la informalidad laboral y con ciertos sectores económicos que tienen una mayor presencia de jóvenes. Según las proyecciones de la OIT (*Naciones Unidas, 2023*), en 2022 se estima que el desempleo juvenil en la región haya disminuido al 15,4%, llegando a los niveles prepandemia. A pesar de este dato, el desempleo juvenil sigue siendo preocupante en la región y continúa siendo el triple que para las personas adultas, que se estima para el 2022 del 5,4%. Asimismo, al examinar la recuperación del empleo tanto para jóvenes como para personas adultas a nivel nacional, se observa una situación muy heterogénea. En seis de los doce países con datos disponibles, se evidencia un saldo neto favorable para el grupo de jóvenes, mientras que en la otra mitad se observa la situación opuesta. En el primer grupo de países se encuentran Brasil y México, cuyo tamaño tiene una influencia significativa en los promedios regionales. En el segundo grupo de países, las disminuciones netas en el empleo juvenil superan de 7 a 10 puntos porcentuales a las observadas entre la población adulta.

Adicionalmente, en la región persisten los desafíos históricos que enfrentan las y los jóvenes para su inclusión económica, como una mayor intermitencia laboral y más inestabilidad ocupacional, que, a su vez, se asocia a su mayor prevalencia en actividades informales, precarias y de baja calificación. Cuando están empleadas, las y los jóvenes de ALC suelen tener trabajos de peor calidad, con salarios más bajos y jornadas laborales más largas (*OIT, 2022a*) en comparación con las personas adultas. Esto tiene consecuencias negativas a largo plazo, ya que tienen menos probabilidades de estar inscritos en los sistemas de protección social.

La informalidad es uno de los factores que más pueden perjudicar la calidad del empleo juvenil en América Latina y el Caribe. Las y los jóvenes de ALC tienen más probabilidades que las personas adultas de acabar en un empleo informal y quedar sin la protección social y los derechos generales del sector formal. La informalidad entre las y los jóvenes de la región, a pesar de haber disminuido en casi un 10% en los últimos quince años y de las diferencias significativas entre países, sigue siendo, por término medio, bastante alta, representando el 62,4% (*Cepal,*

2022b). Las personas jóvenes de hogares pobres o vulnerables tienen más probabilidades de tener un trabajo informal que las de clase media. Las tasas de informalidad son ligeramente superiores entre las mujeres jóvenes y los trabajadores más jóvenes, que entre los jóvenes de mayor edad y los adultos. Fundamentalmente, y en consonancia con la evidencia existente, las y los jóvenes con menor nivel educativo y en zonas rurales experimentan mayores tasas de informalidad. Las y los trabajadores con menor nivel de escolarización también han sido quienes registraron las pérdidas más significativas de empleo después de la pandemia debido, entre otras causas, al mayor peso que la informalidad tiene entre las personas jóvenes con bajo nivel educativo.

En general, las y los jóvenes que experimentan altos niveles de desempleo e informalidad tienen un desempeño consistentemente inferior en el mercado laboral cuando alcanzan la edad adulta. Para aquellas y aquellos adolescentes que tempranamente ingresan al mercado de trabajo y, en general, para las personas jóvenes con baja experiencia laboral y menor desarrollo de habilidades funcionales para el trabajo, la elevada rotación ocupacional atenta contra la posibilidad de acumular calificaciones específicas dificultando, así, su trayectoria laboral futura. A su vez, la menor experiencia les reduce, especialmente en contextos de baja demanda de trabajo, la probabilidad de acceder a un puesto de trabajo y les incrementa las posibilidades de ser despedidos. Esta situación puede ir acompañada de un aumento en el efecto desaliento que redundaría en menores incentivos tanto para la búsqueda de empleo como para iniciar o continuar con los estudios.

En 2022, el 20% de las y los jóvenes en América Latina y el Caribe no están participando en educación, empleo o formación, lo cual refleja un enorme desafío para la inclusión de las juventudes de la región y las dificultades que enfrentan en la transición de la educación al trabajo. La proporción de jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo y del mercado laboral es significativamente alta entre quienes están en situación de pobreza, especialmente para las personas jóvenes de 25 a 29 años y para las mujeres en todos los rangos de edad. La tasa de jóvenes que no estudian ni están insertados en el mercado laboral alcanza el 27% entre las mujeres y representa el 14% de los hombres (*Naciones Unidas, 2023*). La Cepal ha identificado este fenómeno como una de las manifestaciones más graves de exclusión que enfrentan las juventudes en la región, en la cual convergen factores tanto estructurales como coyunturales (*Cepal, 2022c*). Asimismo, existen fuertes brechas entre las madres jóvenes (43%) y quienes aún no lo son (25%) y de condiciones étnico-raciales (la proporción de mujeres afrodescendientes que no están estudiando ni trabajando es mayor a la de los hombres en todos los casos y mayor a la de las mujeres no afrodescendientes, excepto en los casos de Argentina, Honduras, Nicaragua y Panamá).

Las razones que explican la situación de las personas jóvenes que no estudian ni están insertadas en el mercado laboral son diversas. Además de las barreras estructurales en la inserción laboral, contribuyen a este problema las deficiencias en los sistemas de cuidado y las políticas de conciliación entre el trabajo, el estudio, las responsabilidades familiares y la vida personal. También influyen la falta de conexión entre la oferta educativa y los intereses de los jóvenes, lo que lleva a la desmotivación y la necesidad de dedicar más tiempo a la búsqueda de un trabajo que cumpla con sus expectativas económicas y de desarrollo personal (Cepal, 2018).

Las personas jóvenes que no estudian ni están insertadas en el mercado laboral pueden ser estigmatizadas o vinculadas a la vagancia y la violencia, y quienes se quedan mucho tiempo en esta situación sufren un alto riesgo de marginación. La inactividad también es un problema porque contribuye a la persistencia intergeneracional de la desigualdad, impide que la región aproveche la ventana de oportunidad demográfica y puede asociarse a comportamientos de riesgo como la delincuencia y la violencia. Sin oportunidades económicas, las personas jóvenes desempleadas tienen más probabilidades de perjudicarse a sí mismos y a la sociedad. Sin embargo, las y los jóvenes en ALC son un grupo extremadamente heterogéneo que requiere distintos elementos para integrarse en la sociedad. Identificar las diferentes características y necesidades de los varios subgrupos de las juventudes, incluyendo el trabajo no remunerado, especialmente de las mujeres, es clave en la definición de diferentes estrategias para una inclusión más efectiva de las personas jóvenes en el mercado laboral.

Otra variable importante a considerar para el acceso a un empleo digno es la necesidad de flexibilización del reconocimiento de títulos académicos para las personas jóvenes en situación de desplazamiento, esto porque impide o limita el acceso al mercado laboral, los pone en estado de indefensión y puede llevar a procesos de discriminación, explotación laboral o ausencia de reconocimiento de sus derechos. Además, limita la capacidad de estas personas de aportar desde su experiencia y conocimientos previos a las nuevas sociedades de sus países de acogida.

El emprendimiento juvenil es otro elemento que ofrece oportunidades para la integración de las personas jóvenes de América Latina y el Caribe en los mercados laborales y representa uno de los posibles motores internos de crecimiento. A pesar de que la juventud iberoamericana mantiene una predisposición favorable hacia el emprendimiento, la actividad empresarial de los jóvenes en ALC se caracteriza por la coexistencia de pocos emprendimientos de rápido crecimiento junto a muchos de subsistencia. Casi el 72,6% de los individuos de edades comprendidas entre los 18 y 24 años considera que el emprendimiento es una opción favorable como elección de carrera, mientras que el 69,51% opina que las personas emprendedoras son

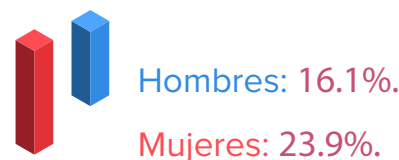
altamente valoradas en la sociedad. El segmento de población más avanzado en edad, es decir, aquellos de 25 a 34 años, exhibe una Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) superior no solo a la observada en el grupo más joven (18-24 años), sino también a la registrada en la población adulta en general, excepto en los casos de Chile y Venezuela, donde el grupo de mayor edad demuestra ser ligeramente más emprendedor. En promedio, las personas de 24 a 35 años presentan alrededor de 1,4 veces más posibilidades de participar en nuevos proyectos empresariales en comparación con las y los jóvenes más jóvenes, y 1,2 veces en el caso de la población activa mayor de 35 años (OIJ, 2018).

El emprendimiento juvenil está ligado a la estructura de los mercados laborales y al tejido empresarial de la región: las y los jóvenes emprendedores en América Latina y el Caribe tienen más propensión a trabajar por cuenta propia, tienen menos educación y provienen de entornos socioeconómicos desfavorecidos en comparación con las economías de la OCDE. Aunque se están desarrollando ecosistemas de emprendimiento de alto impacto en la región, estos aún están en etapas tempranas y benefician a pocos. A pesar de que el apoyo gubernamental y privado está en aumento, las barreras para el emprendimiento juvenil en América Latina, como el acceso a financiamiento, la mejora de habilidades, la creación de redes y la superación de obstáculos regulatorios, siguen siendo más altas, en promedio, que en otras economías emergentes y en la OCDE.

Desafío 2: Menos precariedad para más oportunidades de empleo digno

Desempleo juvenil

La tasa de desempleo juvenil es 19.2%.



3 veces más que los adultos (7.3%).

Los jóvenes pobres y vulnerables tienen el doble de probabilidades de estar desempleados.

Gráfico 4a. Desafío 2: menos precariedad para más oportunidades de empleo digno

Informalidad

La tasa de informalidad entre los jóvenes es **62,4%**.

Los jóvenes de ALC suelen tener trabajos de peor calidad, con salarios más bajos y jornadas laborales más largas en comparación con las personas adultas.



Tasa más alta entre:

- Jóvenes de **hogares pobres** o vulnerables.
- **Mujeres jóvenes** y trabajadores más jóvenes.
- Jóvenes con **menor nivel educativo** y en **zonas rurales**.
- Jóvenes en **desplazamiento**.

Inactividad



1 de cada **5 jóvenes** en **ALC** no están en educación, empleo o formación.

Tasa de inactividad es más alta entre:

- Mujeres (**27%** vs. **14%**)
- Mujeres jóvenes madres (**43%**) respecto a las que aún no lo son (**25%**).
- Nivel educativo **más bajo**.
- Nivel **socio-económico** más bajo.

Gráfico 4b. Desafío 2: menos precariedad para más oportunidades de empleo digno

2.3 Desafío 3: Menos riesgos de salud y más servicios de atención para el logro del bienestar físico y mental

La salud integral y el bienestar de adolescentes y jóvenes es fundamental para la inclusión de la juventud en todas sus dimensiones y para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Alcanzar las metas de cobertura, calidad, equidad, acceso, accesibilidad y confidencialidad en los servicios de salud para las personas jóvenes es crucial para su inserción en la educación, el trabajo y la participación plena en la sociedad, y contribuye a reducir las desigualdades. En el contexto de la pandemia de la COVID-19, se ha evidenciado aún más la interrelación entre la salud, incluyendo la salud mental, y otros aspectos del bienestar general de las y los jóvenes. Las principales preocupaciones sanitarias de las y los jóvenes latinoamericanos están relacionadas con la violencia³, la salud mental, el abuso de sustancias y el embarazo adolescente, elementos que interfieren en los procesos de desarrollo de las juventudes y pueden tener importantes consecuencias negativas a largo plazo. Aunque no se profundiza en este documento, cabe destacar que otro reto en términos de salud juvenil en la región es garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas jóvenes para prevenir tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad. En los últimos años, se ha observado un aumento en el consumo de alimentos poco saludables y una disminución en la actividad física, lo que ha resultado en un aumento alarmante en las tasas de sobrepeso y obesidad. Desde 1990 hasta 2016, la prevalencia de la obesidad en adolescentes de América Latina y el Caribe se ha triplicado, afectando a unos 11 millones de jóvenes (aproximadamente el 10% del total de adolescentes), mientras que el sobrepeso ha afectado alrededor del 29%, lo que representa alrededor de 32 millones de adolescentes (*FAO et al., 2019*). Asimismo, el acceso a alimentos sigue siendo una preocupación para los jóvenes de la región. Una de cada tres personas jóvenes reporta escasez de alimentos en sus comunidades, y una de cada seis, no cuenta con suficientes recursos para comprar alimentos (*Naciones Unidas, 2020*). Estos desafíos requieren atención y acción para promover una alimentación saludable y mejorar las condiciones de nutrición entre la población joven de América Latina y el Caribe.

Los problemas de salud mental y emocional de las juventudes representan un enorme desafío para su inclusión en la sociedad. Las personas jóvenes con problemas de salud mental enfrentan dificultades en su trayectoria educativa, como bajo rendimiento académico, problemas

³ Para más detalles sobre este tema, referirse a OIJ, CAF, PNUD “Desafío Gobernabilidad y Juventud en LAC”. Serie Desafíos, Cuadernillo 2. 2023.

de disciplina y asistencia y, eventualmente, abandono escolar. Esto repercute en su inserción laboral en el futuro. Además, los problemas de salud mental en la adolescencia y juventud afectan la autoestima, las relaciones interpersonales y aumentan las posibilidades de discriminación y estigmatización. En casos extremos, pueden llevar a autolesiones y expresiones de violencia hacia otros.

En el contexto de América Latina y el Caribe escasean datos sobre la salud mental de las personas jóvenes. Si se considera el suicidio como máxima expresión de trastornos de salud mental, este es la tercera causa de mortalidad adolescente y juvenil en la Región de ALC (*OPS, 2018*). En la mitad de los países para los cuales se cuenta con datos, las tasas de suicidio son superiores entre personas jóvenes de 15 a 29 años comparadas con las de la población adulta. La brecha entre personas jóvenes y adultos es especialmente marcada en algunos países, como Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Nicaragua y Paraguay. También destacan los casos de Guyana y Surinam, que tienen las tasas de suicidio más altas de la región. El suicidio de jóvenes indígenas lidera las tasas entre los diferentes grupos poblacionales latinoamericanos (*Unicef, 2012*).

Los problemas de salud mental y emocional en las y los jóvenes son diversos y multifacéticos. Factores como la pobreza, vivir o trabajar en la calle y enfrentar situaciones como el acoso escolar o ciberacoso, la violencia doméstica, eventos traumáticos y conflictos, son importantes riesgos para la salud mental de las y los jóvenes. Cuanto más expuestos estén a estos factores de riesgo y sin agentes de protección, mayor será el impacto en su salud mental. Además del suicidio, también se documenta entre la población joven la presencia de trastornos mentales, emocionales, alimentarios y del comportamiento (*Cepal, 2021*). Todos ellos son temas importantes de tratar en torno a la salud mental, en particular, en un contexto de limitado acceso a la salud por parte de las personas jóvenes.

La pandemia ha afectado de manera particularmente alarmante a las y los jóvenes de América Latina y el Caribe, dejando profundas huellas sobre su desarrollo emocional y salud mental. Los efectos del estrés familiar, el aislamiento social, el riesgo de violencia doméstica, la interrupción de la educación y la incertidumbre en torno al futuro, son algunos de los elementos que han causado el aumento de la depresión y la ansiedad en las juventudes de la región. El 72% de los jóvenes declaran que la pandemia ha afectado su salud mental (*Naciones Unidas, 2022*). Al observar los datos desagregados por género, las más afectadas han sido las mujeres y las juventudes LGBTIQ+. Con respecto a los principales síntomas de los problemas de salud mental que se han producido en el contexto de la pandemia, las personas jóvenes mencionan

el estrés como principal síntoma (26%), seguido por la ansiedad (25%), la depresión (22%), las dificultades para dormir (17%) y, finalmente, los ataques de pánico (10%)⁴.

La salud mental y el bienestar emocional están también estrechamente vinculados a otro aspecto importante de la salud de las personas jóvenes: el abuso del alcohol y las drogas. Cada vez, las y los adolescentes comienzan a consumir a edades más tempranas; en algunos países de la región, un alto porcentaje de adolescentes entre los 13 y 15 años ya ha consumido bebidas alcohólicas. El consumo tiende a ser más alto en los países del Caribe y en dos países del Cono Sur, Argentina y Uruguay. El consumo de sustancias psicoactivas en la adolescencia es un problema de salud pública con graves consecuencias para el desarrollo cerebral, que puede tener efectos a lo largo de toda la vida. El consumo de alcohol y otras sustancias en las y los jóvenes ha sido relacionado con un mayor riesgo de accidentes automovilísticos, violencia, bajo rendimiento académico, comportamientos sexuales de riesgo y dificultades en las relaciones con los padres y compañeros (*OPS, 2018*).

Como lo demuestra la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su último informe, todas las sustancias, lícitas e ilícitas, que incluyen alcohol, tabaco, cannabis, clorhidrato de cocaína (referido como cocaína) muestran algunos niveles de uso entre estudiantes de octavo grado (hasta el 20%), y el uso de cualquier sustancia psicoactiva entre estudiantes de enseñanza secundaria (llegando hasta el 30%), lo cual es motivo de preocupación para toda la región y necesita intervenciones preventivas a partir de la primera infancia (*CICAD, 2019*). En la población de estudiantes de enseñanza secundaria, la mayoría de los países con datos de tendencias disponibles muestran un declive del consumo de tabaco y aumento en el consumo de cannabis, aunque las tendencias de la cocaína son más variadas en este grupo de edad. Un hallazgo importante es la equiparación en los niveles de consumo de alcohol entre hombres y mujeres y un consumo más elevado de inhalables entre las mujeres. Esta tendencia de cerrar la brecha de género en el consumo de alcohol, que se ha observado durante muchos años, indica cambios en las normas sociales que también se reflejan en el uso de otras sustancias psicoactivas en varios países. Al contrario, se observan claras diferencias en el uso de cocaína entre hombres y mujeres, con tasas más altas de uso entre los hombres.

⁴ La Segunda Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la pandemia de la COVID-19 se aplicó de manera virtual por medio de la plataforma Google Forms entre el 26 de agosto y el 31 de octubre de 2021 y fue respondida por jóvenes entre 15 y 29 años. Por tratarse de una encuesta abierta y un muestreo no-probabilístico, los resultados de esta no son representativos de la población joven de la región ni de ningún país en particular. Sin embargo, son referidos aquí, ya que son informativos respecto de cuál fue su situación y pueden orientar tomas de decisión con miras a incrementar su bienestar.

En el marco de los determinantes que influyen en la inclusión de las juventudes en los sistemas de salud para la prevención y el tratamiento del consumo de alcohol y drogas, los factores más relevantes son las condiciones de pobreza, la orientación sexual, el entorno familiar (como el abuso de alcohol por parte de los padres o situaciones de violencia doméstica) y la condición étnico-racial. Por ejemplo, los jóvenes indígenas tienen una mayor propensión al alcoholismo, abuso de drogas, suicidio y depresión, dados sus niveles de pobreza, el limitado acceso a la salud, la educación y otros servicios básicos, así como la influencia de la marginalización, la destrucción de la cultura y de los valores indígenas (OPS, 2006).

Las variaciones en las conductas de consumo de drogas plantean desafíos continuos. El uso de drogas entre las mujeres estudiantes de secundaria requiere enfoques nuevos para la prevención y el tratamiento. La disminución de la edad de inicio del consumo, tanto en hombres como en mujeres, indica un mayor nivel de consumo o dependencia, lo cual tiene implicaciones importantes para intervenciones específicas. Es necesario comprender mejor los cambios en los patrones de uso y el impacto en la salud de estas sustancias, y los esfuerzos para reducir el consumo de drogas deben basarse en evidencia científica para ser efectivos.

Otro gran desafío para las y los adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe es la salud sexual y reproductiva accesible, libre de coerción, violencia o discriminación. A pesar de los esfuerzos y los avances logrados en la región, persisten altos riesgos para las jóvenes, quienes están teniendo relaciones sexuales, a menudo sin protección, lo cual las coloca en riesgo de embarazos no deseados, abortos inseguros, e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluyendo el VIH. América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo y se estima que casi el 18% de todos los nacimientos corresponden a mujeres menores de 20 años de edad (UNFPA, 2020). Anualmente, cerca de un millón y medio de adolescentes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años dan a luz. Estas cifras, ya alarmantes, adquieren un carácter aún más preocupante cuando se considera que muchos de estos embarazos son resultado de bajos niveles educativos, acceso limitado a métodos anticonceptivos y violencia de género y sexual, además de reflejar las brechas de desigualdad ya existentes en la región como la condición socioeconómica, de discapacidad, la etnia, especialmente para las mujeres indígenas, y la residencia en zonas rurales (OPS, 2018). Estos embarazos no deseados, que podrían haberse prevenido, dan lugar a una reducción de oportunidades para estas jóvenes (UNFPA, 2020).

La maternidad temprana conlleva mayores riesgos para la salud tanto de la madre como del niño, lo que resulta en mayores costos de atención médica. Además, los embarazos prematuros se relacionan con la interrupción de la educación y un menor rendimiento académico.

Las mujeres que son madres en la adolescencia tienen tres veces menos oportunidades de obtener un título universitario (6,4%) que las que deciden postergar su maternidad a la vida adulta (18,6%). Una menor educación limita las oportunidades laborales de las mujeres, lo que se traduce en una menor participación en el mercado laboral formal, salarios más bajos y una carga adicional de trabajo no remunerado en el hogar. Las mujeres que son madres tempranas ganan en promedio un 24% menos que aquellas que son madres en la vida adulta y presentan tasas más altas de inactividad y desempleo. A su vez, los ingresos reducidos se traducen en contribuciones fiscales directas e indirectas más bajas. El embarazo adolescente se vincula también con la violencia, la pobreza y los matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados, profundizando las desigualdades de género existentes y la limitada autonomía física y económica de las mujeres jóvenes. En ALC, una de cada cinco niñas contrae matrimonio o mantiene una unión temprana antes de cumplir los 18 años (*Naciones Unidas, 2023*). El impacto de estas prácticas nocivas no se limita a las niñas, sino que perpetúa la transmisión intergeneracional de la pobreza y afecta a las familias, así como al desarrollo de comunidades y países (*ONU, Cepal, 2022*). Para las personas jóvenes con discapacidades, especialmente niñas y mujeres jóvenes, el desafío de acceder a servicios sanitarios, incluso de salud sexual y reproductiva, resulta aún más significativo. Las experiencias sociales sobre las juventudes, la discapacidad y el género, se entrecruzan y crean barreras que impiden que los jóvenes con discapacidad ejerzan su autonomía y satisfagan sus derechos humanos en cuanto a la libertad de vivir sin violencia, especialmente, la violencia de género (VDG), y la libertad para decidir sobre sus propias vidas sexuales y reproductivas (*UNFPA, 2018*).

La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto mayor en la salud sexual y reproductiva de las mujeres adolescentes y jóvenes en comparación con las mujeres adultas en América Latina y el Caribe. Los sistemas de salud se han visto obligados a reorganizarse para hacer frente a una demanda sin precedentes, que ha resultado en el cierre o limitación de servicios de atención primaria y secundaria, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, lo cual ha generado dos consecuencias para las mujeres jóvenes de la región. Por un lado, las dificultades y barreras en el acceso a los anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva han aumentado la tasa de embarazo y maternidad adolescente en la región. Por otro lado, las medidas de confinamiento han aumentado la exposición a situaciones de violencia sexual y abuso en el ámbito intrafamiliar. Según las estimaciones de UNFPA, los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la región sobre el embarazo en la adolescencia se pueden cuantificar en alrededor de medio millón de embarazos adicionales, lo cual representa un retroceso de cinco años en términos de los logros sobre la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente de América Latina y el Caribe, pasando de 61 a 65 nacidos vivos por cada mil adolescentes de 15

a 19 años (UNFPA, 2020). Esto tendrá consecuencias socioeconómicas tanto para las madres adolescentes y sus familias como para la sociedad en general.

La inversión en la salud integral de las juventudes es clave para su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. La identificación de sus necesidades específicas y la definición de políticas de prevención y tratamiento de los principales aspectos que afectan la salud de las personas jóvenes, incluyendo la salud mental, la salud escolar, la salud sexual y reproductiva, así como la promoción de la actividad física, la nutrición y la reducción de riesgos asociados con la mortalidad, la violencia y el consumo de sustancias psicotrópicas, es esencial para alcanzar la Agenda 2030 y, en particular, las metas definidas en el ODS 3.

Desafío 3: Menos riesgos de salud y más servicios de atención para el bienestar físico y mental

El suicidio es la tercera causa de mortalidad adolescente y juvenil en la Región de ALC.

El suicidio de jóvenes indígenas lidera las tasas entre los diferentes grupos poblacionales latinoamericanos.



La tasa de suicidio es más alta entre los hombres.

El 72% de los jóvenes declaran que la pandemia ha afectado su salud mental.

Abuso de sustancias

Hasta el 20% de las personas jóvenes consumen alcohol y drogas antes de los 14 años.



El consumo de alcohol ya está equiparado entre hombres y mujeres, y aumenta el consumo de inhalables entre las mujeres.

Gráfico 5a. Desafío 3: menos riesgos de salud y más servicios de atención para el bienestar físico y mental

Salud sexual y reproductiva

América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo: casi el **18%** de todos los nacimientos corresponden a mujeres menores de **20 años** de edad.



Menos de la mitad de las **mujeres jóvenes** con hijos están empleadas, mientras que el **83,6%** de los **jóvenes padres** tienen empleo.

Maternidad temprana se relaciona con:



Niveles educativos más bajos.



Niveles de inactividad y desempleo más altos.



Mayores costos asistenciales de gestación, parto y puerperio.



Efectos pandemia (por dificultad de accesos a anticonceptivos y aumento de la violencia intrafamiliar): medio millón de embarazos adicionales.

Gráfico 5b. Desafío 3: menos riesgos de salud y más servicios de atención para el bienestar físico y mental

3. La mirada hacia el futuro I Soluciones y propuestas



Las personas jóvenes juegan un papel fundamental en el logro del desarrollo sostenible enunciado en la Agenda 2030, promoviendo soluciones innovadoras y beneficiosas para las comunidades y el ambiente a largo plazo.

3.1 Jóvenes hacia una educación pertinente y de calidad

3.1.1 Superar la crisis educativa y reinventar la educación después de la pandemia

Una de las mayores oportunidades de inversión en América Latina y el Caribe es centrarse en la educación de los futuros agentes de cambio, las personas jóvenes, quienes representan uno de los segmentos más importantes de la población de la región, un cuarto de la cifra total. Antes de la pandemia, la región ya venía experimentando una desaceleración de los logros educativos alcanzados en décadas previas y enfrentaba una crisis de aprendizajes y exclusión

que obstaculizaba el cumplimiento de las metas del Objetivo 4 acordadas para 2030. Los impactos de la pandemia profundizaron estos desafíos educativos, a la vez que generaron una oportunidad para innovar y transformar la educación en la región.

La educación cumple un papel esencial para el desarrollo sostenible, inclusivo y con igualdad, y puede tener asimismo un papel central en la estrategia de recuperación transformadora, ya que invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países, las personas jóvenes, y en la prosperidad de la sociedad en su conjunto. Reinventar la educación incluye desarrollar habilidades transversales que permitan a las personas jóvenes reinventarse a lo largo de todas las etapas de la vida, adaptarse a circunstancias cambiantes y muy diversas, así como identificar las oportunidades de crecimiento (CAF, 2016). Entre estas habilidades clave para prosperar en el siglo XXI, se encuentran las competencias digitales (como el pensamiento computacional), las habilidades cognitivas avanzadas (como el pensamiento crítico y la resolución de problemas), las habilidades relacionadas con la función ejecutiva (como la autorregulación y la metacognición) y las habilidades socioemocionales (como la autoestima, la adaptabilidad, la creatividad, la perseverancia y la empatía) (BID, 2019). Estas competencias son ampliamente transferibles a diversos contextos, y resultan esenciales, ya no solo para ingresar al mercado laboral y aportar al desarrollo de la región, sino también para mejorar el bienestar y la salud mental de las personas jóvenes.

La transformación educativa exige también un nuevo pacto social, político y fiscal, amplio y a largo plazo, el fortalecimiento del papel de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en los sistemas de gestión, abordar los desafíos específicos de cada nivel educativo, promover la articulación intersectorial y asegurar la sostenibilidad financiera de la mano de instituciones educativas fortalecidas para una mayor equidad y eficiencia del gasto.

3.1.2 Transformar la educación y reducir las brechas a través del aprendizaje digital

Invertir en la educación y en el desarrollo de competencias y habilidades de adolescentes y jóvenes genera importantes beneficios para la economía, el bienestar humano y el medioambiente. Se estima que hasta un 30% de las diferencias en el producto interno bruto (PIB) per cápita se pueden atribuir a las variaciones en el capital humano (Unicef, 2021). En la recuperación pospandemia, existe una oportunidad única de transformar los sistemas educativos, hacerlos más flexibles, inclusivos, accesibles e innovadores para llegar a todas las juventudes y mejorar la calidad y relevancia de la enseñanza en América Latina y el Caribe.

El aprendizaje digital tiene el potencial de reducir las desigualdades educativas, ampliando las tecnologías y las soluciones de manera que sean accesibles para los adolescentes y jóvenes más vulnerables y excluidos. En la educación del siglo XXI, las habilidades digitales son cada vez más esenciales y deberían proporcionar a los estudiantes una variedad de competencias tecnológicas relacionadas con el empleo, que se requieren en esta fase de recuperación de las sociedades y economías afectadas por la crisis de la COVID-19. Estas habilidades les permitirían a las y los adolescentes y jóvenes tener autonomía en su vida cotidiana, encontrar más fácilmente empleos, emprender negocios y contribuir de manera productiva en sus comunidades, reduciendo al mismo tiempo las brechas digitales de la región.

En un mundo donde la tecnología se ha hecho omnipresente, la ciudadanía digital es también fundamental y abarca no solo el conocimiento técnico, sino que implica el desarrollo de otras habilidades transversales que les permitan a las y los jóvenes utilizar la tecnología de manera ética, responsable y productiva en su vida diaria y en el ámbito profesional (*BID, 2019*). Desarrollar estas habilidades transversales y digitales de manera paralela es imprescindible.

Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), Provincia de Jujuy Ministerio de Educación (Argentina) con el apoyo de CAF. El objetivo del Programa es mejorar la equidad y el acceso a una educación de calidad en todos los niveles educativos y fortalecer la pertinencia de las ofertas educativas que permitan contribuir a la inclusión de la población más vulnerable y a la transformación productiva de la Provincia de Jujuy. Para ello el Programa ha beneficiado a más de 250 mil estudiantes con intervenciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura educativa con priorización en 101 centros de educación secundaria rural y primera infancia, la formación de 28 mil docentes y directivos en diseño curricular, educación digital, habilidades socioemocionales y gestión, el desarrollo de recursos tecnológicos para el aprendizaje en más de 1000 centros educativos así como el desarrollo de la plataforma y contenidos educativos, desarrollo de un sistema integral de gestión educativa y recursos tecnológicos para la gestión de los centros educativos y el nivel central.

Con el apoyo de la multinacional japonesa Shiseido, Unicef Perú ha implementado el programa **Skills4Girls** (Unicef, 2023) desde enero de 2021 para promover un conjunto de políticas educativas con y para mujeres adolescentes de 16 a 17 años que han experimentado la maternidad temprana y para las adolescentes en situación de vulnerabilidad que tienen interés en carreras profesionales vinculadas a CTIM. El programa ha implementado una capacitación en CTIM y habilidades digitales, nuevas tecnologías y habilidades para la vida en los Centros de Educación Técnico-Productiva del Ministerio de Educación del Perú (CETPRO) para abordar la brecha de género existente en el acceso a habilidades digitales y carreras CTIM de las adolescentes y crear conciencia sobre las normas de género que desalientan su inclusión.

Unicef, junto con América Solidaria y adolescentes de la red Concausa, desarrolló el Programa Regional **PLAN12** (Unicef, 2023a), para desarrollar las habilidades transferibles de las y los jóvenes mediante el diseño e implementación de sus propios proyectos de impacto social. Basado en el Marco Conceptual de Habilidades Transferibles de Unicef, el curso invita a los y las adolescentes a identificar un problema en sus comunidades y buscar soluciones. La iniciativa se creó al comienzo de la pandemia para responder a la necesidad de continuar aprendiendo y desarrollando habilidades incluso durante el cierre de las escuelas. Desde entonces, los contenidos del PLAN12 se han utilizado en diferentes experiencias piloto en diez países de América Latina y el Caribe, lo cual ha demostrado su versatilidad. Argentina, por ejemplo, está incorporando PLAN12 a la iniciativa PLaNEA que acompaña las gestiones educativas provinciales en la transformación de las escuelas secundarias. En Trinidad y Tobago se están adaptando los contenidos de PLAN12 y se están capacitando facilitadores para desarrollar habilidades en los y las adolescentes migrantes.

A través del proyecto **PROMISE** (*Banco Mundial, 2021*), el Banco Mundial está apoyando al Gobierno de Colombia en la implementación de una estrategia de recuperación de aprendizajes para el desarrollo de habilidades socioemocionales de las y los estudiantes. Esto incluye formación situada para docentes, así como los recursos para la evaluación formativa de la estrategia gubernamental Evaluar para Avanzar, una alianza entre el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y el Ministerio de Educación Nacional.

El **programa de becas DAFI** (*UNHCR, 2022*) (Iniciativa Académica Alemana Albert Einstein) ofrece a la población estudiantil refugiada y cualificada la posibilidad de obtener un grado académico en su país de origen o de acogida, a través de un programa de becas que incluye costos de educación y manutención, además de apoyo psicosocial para promover la integración. El programa se desarrolla a nivel global con el trabajo coordinado entre ACNUR, donantes privados y los gobiernos de Alemania, Dinamarca y República Checa. En la región de América Latina se implementa en México, Colombia y Ecuador.

3.2 Jóvenes hacia una economía justa y sostenible

3.2.1 Aprovechar el bono demográfico y el potencial innovador de las juventudes para lograr un crecimiento económico inclusivo

Enfocar las estrategias de recuperación en las personas jóvenes y su inclusión laboral es otra gran oportunidad que tienen América Latina y el Caribe para transformar las economías, crear nuevos empleos de calidad y garantizar el bienestar de las generaciones futuras. En el año 2050, más del 90% de la fuerza laboral en su plena edad productiva estará compuesta por individuos que hoy tienen menos de 25 años (*Banco Mundial, 2023*). A través de buenas políticas de fomento del empleo juvenil, la región tiene la oportunidad de aprovechar el actual bono demográfico y los beneficios de una exitosa inclusión de las y los jóvenes en el mercado del trabajo para aumentar la productividad y el espacio fiscal, y así lograr un crecimiento económico más inclusivo e innovador. Un incremento significativo en el crecimiento actual, aprovechando la presencia de una población joven en edad laboral y con capacidad de ahorro, resultaría en un aumento de la tasa de ahorro nacional. Esto, a su vez, garantizaría que en el futuro la población de mayor edad pueda contar con mayores recursos fiscales destinados a servicios

sociales, de salud y pensiones (*Banco Mundial, 2021a*).

Invertir en el futuro laboral de las y los jóvenes, fomentando programas de apoyo al empleo juvenil, emprendedurismo e intermediación laboral, es crucial también para revertir el impacto de la pandemia en ellos y reconstruir una economía más incluyente, resiliente y sostenible. La creatividad e innovación de las juventudes constituyen activos con un gran potencial y podrían impulsar nuevos modelos de negocios, así como el dinamismo y la diversificación de los sectores económicos. Una mayor inclusión y participación de los jóvenes en la construcción de políticas y programas de desarrollo de competencias y fomento del empleo en esta fase de recuperación representa una importante oportunidad para transformar los lugares de trabajo, fomentar el emprendimiento juvenil a través del uso de nuevas tecnologías y prácticas laborales y transitar hacia una economía más respetuosa del medioambiente y digitalizada.

Las iniciativas de apoyo al emprendimiento juvenil representan una herramienta muy poderosa para la generación de más y mejores empleos para las juventudes latinoamericanas. Se necesita reforzar y ampliar los programas de formación y apoyo a las y los jóvenes emprendedoras y emprendedores, mejorando la prestación de servicios financieros y no financieros, y la articulación con el sector privado y la sociedad civil.

3.2.2 Economía verde, digital y de cuidado al centro de las políticas de recuperación sensibles al género y las juventudes

Las personas jóvenes representan una fuerza impulsora del cambio y de la innovación en numerosos ámbitos, incluyendo los negocios, la tecnología y la ciencia. El desarrollo de la economía verde puede ser un importante generador de oportunidades de empleo digno para las y los jóvenes y, al mismo tiempo, contribuye a la transformación estructural sostenible e integradora y a la diversificación económica. Según las estimaciones de la OIT, de aquí al 2030 la transición hacia una economía verde podría crear globalmente 8,4 millones de puestos de trabajo adicionales para las y los jóvenes (*ILO, 2022*). Para que ellas y ellos aprovechen las oportunidades que abre la transición hacia una economía más sostenible desde el punto de vista medioambiental, deben conocer las tecnologías y actividades que subyacen a esta transición y las profesiones emergentes asociadas, así como poseer las competencias que exigen estas profesiones.

Asimismo, la creciente digitalización de la economía y la sociedad está afectando profundamente al mundo laboral, y se espera que la tendencia continúe e, incluso, se acelere en los próximos años. La economía digital también tiene un potencial considerable para promover el empleo de las y los jóvenes, pero se necesita mucho en el ámbito político para transformar

este potencial en oportunidades reales de trabajo decente. El empleo juvenil en la economía digital se caracteriza por contar con trabajadores altamente cualificados y educados. La crisis causada por la COVID-19 agravó esta situación, ya que las personas jóvenes con menos habilidades fueron las más afectadas en términos de pérdida de empleo. A nivel macroeconómico, la economía digital ofrece buenos rendimientos y empleos de calidad. No obstante, persisten desafíos, especialmente en países de renta baja y media, donde la conectividad a Internet es un problema, especialmente en zonas rurales. La expansión de la banda ancha en estas áreas requerirá inversiones significativas, pero se ha demostrado que es rentable. Se estima que lograr la cobertura universal de banda ancha para 2030 podría generar 24 millones de nuevos empleos en todo el mundo, de los cuales 6,4 millones serían para jóvenes (*ILO, 2022*). Es esencial invertir en infraestructuras digitales para promover el empleo juvenil y garantizar igualdad de oportunidades en la economía digital.

Otro ámbito de oportunidad para la inclusión laboral de las personas jóvenes, especialmente de las mujeres, es la economía del cuidado. A nivel mundial, el 10,7% de todos los trabajadores jóvenes (de 15 a 29 años) trabajaban en el sector sanitario y social, en la educación o como empleados domésticos justo antes del inicio de la pandemia. Según las estimaciones de la OIT (*ILO, 2022*), las inversiones en servicios sanitarios y de cuidados de larga duración y en educación podrían crear 17,9 millones de nuevos puestos de trabajo para jóvenes de aquí al 2030, incluidos 9,3 millones de puestos de trabajo en educación, 5,1 millones de puestos de trabajo en sanidad y asistencia social e, indirectamente, 3,5 millones de puestos de trabajo en sectores no asistenciales. Invertir en este sector beneficia a las y los jóvenes en cuatro aspectos fundamentales: crea oportunidades de trabajo decente, mejorando las perspectivas de empleo de los jóvenes, en particular las de las mujeres jóvenes; facilita la incorporación y permanencia en el mercado laboral de quienes tienen responsabilidades familiares; promueve el bienestar de los jóvenes; y, como resultado de todo lo anterior, contribuyen a reducir las tasas de quienes no estudian ni están inseridos en el mercado laboral, especialmente entre las mujeres jóvenes. Finalmente, es de suma importancia tener en cuenta las disparidades de género para abordar de manera efectiva los obstáculos que afectan principalmente a las mujeres jóvenes. La pandemia ha resaltado aún más la función central que desempeñan las mujeres jóvenes en la prestación de cuidados no remunerados. No obstante, las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia no han tenido en consideración los desafíos específicos que ellas han enfrentado y siguen enfrentando. Por lo tanto, es esencial desarrollar políticas de formación profesional desde una perspectiva de género y coordinarlas con otras políticas activas en el ámbito laboral y de protección social, las cuales también deben incorporar este enfoque (*OIT, 2021*).

Escuela de Innovación y ambientes digitales del ITSE (Panamá). CAF acompañó la definición y puesta en marcha de una nueva Escuela Digital en el Instituto Superior Especializado (ITSE), el primer instituto público de educación técnica superior de Panamá. Se definieron nuevas ofertas de educación técnica superior para atender las necesidades laborales del sector digital, las industrias de telecomunicaciones, tecnologías de la información, así como la demanda de trabajadores encargados de digitalizar los distintos sectores económicos, y promover la capacidad innovadora del sistema productivo panameño. Con participación del Ministerio de Presidencia, la Agencia de Innovación Gubernamental AIG y el ITSE, el proyecto contó con la participación de representantes del sector productivo nacional, y expertos nacionales e internacionales, que desarrollaron una propuesta de cinco programas de técnico superior en Ciberseguridad; Desarrollo de Software, Tecnologías de la Producción; Big Data y Analítica, y Gestión e Innovación Digital e identificó los requerimientos técnicos, académicos y administrativos para poner la nueva escuela en funcionamiento así como estrategias para la transversalización de habilidades digitales en todas ofertas del ITSE, de colaboración y articulación al ecosistema digital del país, y de transición de los futuros egresados hacia el empleo y el emprendimiento.

Para hacer frente a las repercusiones del cambio climático en **Guatemala**, entre las cuales se encuentran lluvias más frecuentes y abundantes, tempestades violentas y sequías prolongadas, que representan una grave amenaza para el sector agrícola del país, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha formulado un programa de fomento del emprendimiento juvenil a fin de impulsar el empleo rural y promover las actividades empresariales. Entre las iniciativas más exitosas promovidas en este marco, [ChispaRural](https://www.chisparural.gt/)⁵ es una plataforma digital de conexión entre las personas jóvenes y el laboratorio empresarial La Factoría. Las personas jóvenes rurales pueden utilizar dicho laboratorio para acceder a información actualizada sobre agricultura sostenible y empleo en las zonas rurales.

⁵ La plataforma está disponible en: <https://www.chisparural.gt/>

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Comisión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el grupo de niños y jóvenes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (YOUNGO) y LinkedIn, lanzaron en noviembre de 2022 el primer **“Pacto de Empleos Verdes para los Jóvenes”** (OIT, 2022b) en la Conferencia sobre el Cambio Climático, también conocida como COP27. Sus objetivos incluyen la creación de un millón de empleos verdes, el apoyo a la ecologización de un millón de empleos existentes y la ayuda a 10.000 emprendedores verdes. Las agencias coordinadoras colaborarán con sus Estados miembros, empleadores, organizaciones de trabajadores y educadores sobre tres ejes: empleo y emprendimiento, educación ambiental, alianzas y empoderamiento de las juventudes para promover una transición a una economía circular y sostenible.

El [Programa ODS Cadenas de Valor⁶](#) del PNUD en América Latina y el Caribe ofrece soluciones integradas para el sector privado, los gobiernos y otros aliados a fin de fomentar la incubación y aceleración de las MIPYMES, a través de un enfoque basado en la demanda hacia una mayor inclusión y economías sostenibles. En República Dominicana, la intervención del Programa En Marcha en Dajabón se enfoca en la mejora de la gestión empresarial e imagen comercial de los microemprendimientos liderados por personas jóvenes y que tengan un cierto grado de relación comercial con sus socios en el lado haitiano, fomentando la cooperación positiva binacional en la zona fronteriza.

3.3 Jóvenes hacia una salud integral y de calidad

3.3.1 Mayor atención a la salud de las y los jóvenes para reducir costos y beneficiar a toda la sociedad

Las personas jóvenes son consideradas un subconjunto saludable de la población y, como resultado, generalmente no se da importancia a sus necesidades de salud. Sin embargo, invertir

⁶ Más información sobre el Programa ODS, Cadenas de Valor del PNUD disponible en: <https://www.undp.org/es/sdgvalue-chains>

en la salud integral de la población joven ofrece oportunidades para responder mejor a una etapa fundamental en la vida, pasar a la vida de adultos con más habilidades para servir a sus comunidades de una forma productiva, promover sus derechos humanos y buscar beneficios que perduren a lo largo de varias generaciones.

Fomentar estrategias proactivas para fomentar una juventud saludable puede también evitar una carga financiera adicional sobre los sistemas de salud. Por ejemplo, invertir en sistemas de salud sexual y reproductiva tiene beneficios inmediatos como menos embarazos no deseados, menores tasas de mortalidad y discapacidad en jóvenes mujeres y recién nacidos, así como menor incidencia del VIH y otras infecciones sexualmente transmisibles. Las ganancias son aún mayores cuando se toman en cuenta los beneficios más amplios y a largo plazo para las mujeres, sus parejas, las familias y la sociedad en general. Estas incluyen aumento en la educación e ingresos de las mujeres, aumento en los ahorros y activos de los hogares, aumento en la escolaridad de los niños, aumento en el crecimiento de PIB y reducción de la pobreza (OMS, 2017).

Además, la frecuencia de los comportamientos relacionados con la salud que empiezan o se consolidan durante la adolescencia, como las relaciones sexuales sin protección (agravadas por la falta de acceso a los métodos anticonceptivos), el consumo de tabaco y de alcohol, la alimentación poco saludable, la inactividad física y el consumo de drogas, afectan el bienestar físico, mental y emocional y tienen repercusiones en las etapas posteriores de la vida (OMS, 2017). Esta fase de reconstrucción después de la pandemia y sus efectos sobre la salud de las juventudes latinoamericanas y caribeñas, ofrece una oportunidad para ampliar los servicios de salud para las personas jóvenes, mejorando su cobertura, calidad y la participación de las y los adolescentes y jóvenes en la definición de la atención que ellos requieren.

3.3.2 Aprender de la pandemia y construir sistemas de salud más inclusivos y resilientes

La pandemia reveló debilidades sistémicas preexistentes de los sistemas de salud de América Latina y el Caribe que impidieron brindar los servicios de salud esenciales de calidad durante la emergencia y reversó los avances obtenidos con tanto esfuerzo en la región. A pesar de eso, las lecciones aprendidas de esta pandemia pueden ser una oportunidad para impulsar una serie de reformas más amplias en el ámbito sanitario, entre las cuales está una mayor atención a las necesidades de las personas jóvenes.

Invertir en atención primaria de salud y mejorar los sistemas de vigilancia de la salud públi-

ca puede fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras pandemias. Además, se requiere aumentar las inversiones para hacer frente a las presiones sobre el sistema de atención a la salud, agravadas por la COVID-19, incluidos los servicios de salud mental para las juventudes y establecer las bases para mejorar los resultados en términos de desarrollo humano y crecimiento económico (*Banco Mundial, 2022*).

Durante la emergencia de la COVID-19, varios países de América Latina y el Caribe implementaron medidas efectivas e innovadoras, como por ejemplo, la expansión de los servicios de salud remotos y la telemedicina, el aumento del uso de datos en la toma de decisiones y el establecimiento de nuevas asociaciones público-privadas para mejorar el acceso a la atención médica durante los momentos críticos de la pandemia. Estas innovaciones tienen el potencial de ser aprovechadas para impulsar reformas más amplias y duraderas, con el objetivo de lograr una mayor resiliencia en el sector de la salud.

Casa Kay trans: construyendo espacios seguros para la juventud trans en Haití. A través del Proyecto Ser LGBTI en el Caribe (BLIC), un proyecto regional financiado por USAID y ejecutado por el PNUD, se presta apoyo a Kay Trans, uno de los pocos centros de acogida para jóvenes transgénero de Puerto Príncipe (Haití). Gestionadas por dos asociaciones locales (AREV y ACIFVH), las instalaciones de Kay Trans representan un refugio de tolerancia y empoderamiento para la comunidad LGBTI haitiana, cuya vulnerabilidad a la violencia se acentúa cada vez que los terremotos sacuden su país. El PNUD ha financiado un proyecto de línea directa para la prevención del suicidio y del VIH. La iniciativa reforzó la capacidad tanto de la AREV como de la ACIFVH para asistir a un mayor número de beneficiarios transexuales que se enfrentan a problemas de salud mental y buscan ayuda. Cuando se detecta una necesidad de ayuda terapéutica (ansiedad, depresión grave, tentativas de suicidio), los agentes telefónicos les remiten a psicólogos que pueden proporcionarles servicios profesionales adaptados a sus necesidades (PNUD, 2023).

La Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (REDI) y el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer lanzaron en 2020 en Argentina la App **Nuestra Decisión** (*Santoro, 2021*), una plataforma sobre salud sexual y reproductiva que facilita el acceso a información sobre derechos y servicios de prevención y atención a violencia de género. La aplicación es gratuita y va dirigida a toda la población, incluidas todas las niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad, sin importar del tipo que sea. También ofrece información sobre lugares de atención y líneas de ayuda, además, como elemento innovador, dispone de un foro que funciona en un grupo de Facebook.

Uruguay, con el apoyo de UNFPA y OPS, logró **disminuir de manera drástica las tasas de fecundidad adolescente** en los últimos 25 años a través de políticas progresivas, respuestas multisectoriales sólidas y monitoreo activo por parte de la sociedad civil (*López-Gómez et al., 2021*). Ahora la tasa es un 50% más baja que la tasa de la región de ALC. Este avance fue posible gracias a la implementación de varias leyes progresistas y una estrategia intersectorial que incluye brindar educación sexual para prevenir embarazos no planeados entre adolescentes, introducir implantes anticonceptivos, difundir información para reafirmar el derecho al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y solicitar asistencia para la interrupción voluntaria del embarazo y aumentar los programas sociales para atender las necesidades de la población adolescente más vulnerable. Finalmente, las políticas y esquemas de protección social están dirigidos a mantener a los niños en la escuela, reintegrar al sistema educativo a las adolescentes que habían desertado debido al embarazo y facilitar la integración de la población joven al mercado laboral.

4. Conclusiones y recomendaciones



Las personas jóvenes juegan un papel fundamental en el avance de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y son actores clave en el cambio social, el crecimiento económico inclusivo y la innovación tecnológica. Su creatividad, emprendedurismo, sus ideales, su energía y su visión son indispensables para el progreso continuo de las sociedades, promoviendo soluciones innovadoras y beneficiosas para las comunidades y el ambiente a largo plazo. La pandemia produjo un deterioro en varios ámbitos cruciales para el desarrollo integral de las personas jóvenes en la región, entre ellos, la asistencia escolar, la calidad educativa, las tasas de desempleo e informalidad, las tasas más altas de embarazo adolescente no deseado, el deterioro de la salud mental y de las habilidades socioemocionales.

Este cuadernillo ha profundizado los desafíos de la educación, el empleo y la salud para la inclusión de las juventudes en América Latina y el Caribe, subrayando sus interconexiones y sinergias y reconociendo que estos no son los únicos factores que afectan la inclusión juvenil en

la región. A pesar de los avances de las últimas décadas, América Latina y el Caribe presentan los mayores niveles de desigualdad del mundo, y muchas personas jóvenes son excluidas del progreso y dejadas atrás de manera sistemática. Las posibilidades que tienen de ejercer sus derechos y acceder a una educación y una salud de calidad y a un empleo digno aún dependen, en buena medida, del lugar en el que viven, del ingreso familiar, o bien de su raza, origen étnico, discapacidad o género, entre otros factores.

La adopción de una mirada multidimensional e integral ha permitido identificar los principales obstáculos y brechas que enfrentan las personas jóvenes en su inclusión social y económica y la interrelación de los ámbitos de la educación, el empleo y la salud para el desarrollo pleno y efectivo de las juventudes en la región. La falta de oportunidades en cada uno de estos ámbitos repercute en los demás y tiene consecuencias duraderas que afectan las capacidades de las personas jóvenes para tener una vida sana y próspera. Al contrario, invertir en las juventudes es clave para lograr un desarrollo sostenible y equitativo, ya que genera un triple beneficio: para adolescentes y jóvenes en el presente, para ellos mismos cuando sean personas adultas y para la siguiente generación de niñas y niños (UNFPA, 2019).

Asimismo, el análisis ha intentado integrar una perspectiva interseccional para entender las causas multifactoriales que generan la exclusión de las personas jóvenes en la región, así como las diversas características que existen al interior de ese grupo heterogéneo que constituyen las juventudes latinoamericanas y caribeñas. Este enfoque ha permitido evidenciar las brechas específicas que experimentan las personas jóvenes en ALC dependiendo de su condición socioeconómica, de su nivel educativo, de su condición étnico-racial (especialmente si son afrodescendientes o de comunidades indígenas), de su lugar de residencia, de su condición de discapacidad, de su orientación sexual e identidad de género.

A partir del análisis de estos desafíos y de las oportunidades identificadas en cada uno de ellos, a continuación, se propone una serie de recomendaciones con miras a orientar las políticas públicas que pretenden aumentar la calidad y la cantidad de oportunidades para que las y los jóvenes participen de manera plena, efectiva y constructiva en la vida de la sociedad y en el logro de los ODS. Dada la naturaleza multidimensional de las dinámicas que inciden en la inclusión juvenil, las estrategias y respuestas deben ser integrales, multisectoriales y multinivel, promoviendo alianzas entre el sector público, privado y social y entre los niveles local, nacional, regional e internacional. Y, por supuesto, las personas jóvenes deben ser socios plenos en los esfuerzos encaminados a esa transformación.

Recomendaciones para construir una educación pertinente y de calidad | ODS 4

R1: Asegurar que todas las personas jóvenes, prescindiendo de su sexo, origen y condición, adquieran las habilidades adecuadas, incluyendo las competencias básicas de lectoescritura y cálculo, las habilidades sociales, emocionales y digitales, para participar exitosa y activamente en la sociedad y en la economía. La Cumbre sobre la Transformación de la Educación, convocada por el Secretario General, António Guterres, que se llevó a cabo en septiembre de 2022, puso de relieve la necesidad de una educación inclusiva y transformadora para garantizar que todos los estudiantes participen sin inconvenientes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que estén seguros y sanos, libres de violencia y discriminación, y que reciban un apoyo integral dentro del entorno escolar (*Naciones Unidas, 2022*). Asimismo, la transformación digital de la educación exige que se desarrollen recursos educativos de calidad y que estos estén disponibles en forma gratuita, sean de fácil acceso, presenten una adaptación lingüística e intercultural y estén alineados con los planes de estudio. El análisis de género en el sistema educativo también constituye una herramienta clave para visibilizar aquellos factores que pueden facilitar o inhibir prácticas inclusivas y equitativas dentro de los sistemas educativos (*CAF, 2023*).

R2: Promover la universalización de la enseñanza secundaria, y su finalización, e impulsar la transformación en la educación terciaria, desarrollando aprendizaje y competencias para la vida, el trabajo y el desarrollo sostenible. Transformar la educación implica empoderar a las y los estudiantes con los conocimientos, competencias cognitivas y socioemocionales, valores y actitudes que les permitan tener la preparación para desenvolverse plenamente en un futuro cambiante e incierto y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar de la humanidad y del planeta (*Naciones Unidas, 2022*). La transformación educativa debe adoptar soluciones digitales, enfoques pedagógicos centrados en la y el estudiante y una mayor atención a la empleabilidad de las personas jóvenes, para asegurar una mayor correspondencia entre la demanda laboral y la oferta formativa y una transición efectiva de todas las personas jóvenes de la educación al trabajo. Para esto, es necesaria una mayor articulación de la educación con el sector productivo y con otros ámbitos de la política pública, como la nutrición y el bienestar psicoemocional y las políticas de igualdad de género (*Cepal, 2022*).

Recomendaciones para construir una economía justa y sostenible | ODS 8

R3: Fomentar la creación de empleo para todas las personas jóvenes, especialmente en la economía verde y digital, así como en la economía del cuidado, eliminando los obstáculos a la entrada y en la transición en el mercado laboral y garantizando la disponibilidad de empleos de calidad y mejores condiciones de trabajo, incluyendo su inclusión en los sistemas de protección social. Las políticas de recuperación deben sentar las bases para fomentar economías más sostenibles, inclusivas y resilientes, por lo cual se necesita enfocarse en las juventudes, poniendo una especial atención a las mujeres, e invertir en estos sectores estratégicos que tienen un gran potencial de creación de empleos para las personas jóvenes. Estas inversiones son fundamentales para evitar cicatrices económicas y sociales más profundas y promover un mejor futuro laboral para todos.

R4: Apoyar el emprendimiento juvenil y las soluciones locales lideradas por las y los jóvenes, a través de apoyo a las micro y pequeñas empresas, programas de incubación, asesoría, apoyo a la innovación y tecnología, desarrollo empresarial y acceso a financiamiento. El emprendimiento juvenil se configura como un vector para la generación de empleo e innovación, el impulso a la pequeña y mediana empresa y para fomento de una mejor distribución económica (OIJ, 2018). En el Pacto Iberoamericano de Juventud, adoptado en el marco de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, bajo el lema “Juventud, Emprendimiento y Educación”, se puso de relieve la necesidad de fomentar la inclusión, la participación, la inversión y el reconocimiento y promoción de los derechos de las juventudes iberoamericanas, así como el fomento de alianzas entre los sectores público y privado (OIJ, 2018a). Las políticas de fomento del emprendimiento deben promover ecosistemas favorables, una mayor articulación con el sector privado y social y facilitar marcos de financiación y espacios para el desarrollo de la creatividad y la innovación juvenil.

Recomendaciones para construir una salud integral y de calidad | ODS 3

R5: Garantizar el acceso universal a servicios de salud integrales y de calidad, incluso la salud digital, con un énfasis en la atención a la salud sexual y reproductiva. La prestación de estos servicios debe respetar los derechos de las personas jóvenes, incluyendo el respeto de su privacidad, y responder a sus necesidades. El monitoreo de su calidad y cobertura deberían llevarse a cabo de conformidad con las normas globales de la OMS, avaladas por los ministerios de salud nacionales. La prioridad es desarrollar programas integrales, que se basen en información desagregada que examine el conjunto heterogéneo de las juventudes, mejo-

ren el ambiente donde viven y el vínculo entre escuelas, familias y comunidades, apoyando la transición a la edad adulta, utilizando un enfoque de género en todos los servicios y fomentando la participación juvenil en todas las etapas.

R6: Brindar servicios de apoyo a la salud mental integral diferenciados a las y los jóvenes a través de los sistemas sanitarios, así como en las instituciones educativas, los lugares de trabajo y los centros juveniles, poniendo particular atención a los temas de prevención de consumo de sustancias y a la promoción del deporte, la actividad física, la cultura y el voluntariado, tanto en zonas rurales como urbanas. El informe Estado Mundial de la Infancia 2021 establece un marco de actuación para guiar a la comunidad internacional, a los gobiernos, a las instituciones educativas y a otras partes interesadas en apoyar a la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Este se basa en tres principios esenciales: comprometerse en reforzar el liderazgo y asegurar las inversiones necesarias; comunicar para erradicar el estigma, fomentar el diálogo para mejorar la sensibilización y la movilización de todas las partes interesadas y mejorar la comprensión en torno a la salud mental; y actuar para reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección de la salud mental en áreas clave de la vida de las y los adolescentes y jóvenes, especialmente en la familia y la escuela. Esto implica invertir en la capacitación de trabajadores y trabajadoras en sectores esenciales, como los servicios de salud mental y protección social, establecer una sólida infraestructura para la recopilación de datos e investigación, y apoyar a las familias, padres y cuidadores (*Unicef, 2022*). Relaciones estables en el hogar pueden servir como protección contra el estrés tóxico y promover la resiliencia y el bienestar general de las y los más jóvenes.

R7: Desglosar los datos por edad, género y diversidad es esencial para entender las complejidades de las necesidades de las personas jóvenes y para desarrollar estrategias efectivas que promuevan la equidad y el acceso igualitario a oportunidades clave como la educación, la salud y el empleo. Los datos desglosados por edad, género y diversidad son herramientas fundamentales para identificar desigualdades y diseñar estrategias específicas que pueden aumentar las oportunidades de la juventud de acceder a educación, salud y empleo. Datos desagregados permiten identificar barreras específicas que enfrentan diferentes grupos de jóvenes y, al comprender estas barreras, se pueden desarrollar estrategias y políticas a medida más efectivas para abordarlas. Por ejemplo, si se descubre que las mujeres jóvenes tienen menos acceso a oportunidades de empleo, se pueden implementar políticas que fomenten la igualdad de género en el ámbito laboral. De manera similar, si hay disparidades en el acceso a la educación para ciertos grupos de edad, se pueden desarrollar estrategias para abordar esas disparidades. Al desglosar los datos por edad y diversidad, se puede también adaptar la prestación de servicios educativos, de salud o de acceso al empleo a las necesidades espe-

cíficas de cada grupo de jóvenes. Por ejemplo diseñar programas de salud mental diseñados para jóvenes, servicios específicos para grupos minoritarios o estrategias de prevención que se ajusten a las características de diferentes grupos de edad. Tener datos desglosados mejora también la equidad de género, ya que permite desarrollar políticas que aborden las brechas de género en el acceso a la educación, la salud y el empleo, y favorece la inclusión de grupos marginados, como personas con discapacidades o grupos étnicos, ya que ayuda a entender las necesidades específicas de diferentes grupos de jóvenes y diseñar estrategia.

R8: Promover la equidad de género a todos los niveles. Como se describió a lo largo del documento en los tres aspectos analizados, la inclusión de las mujeres jóvenes sigue siendo insuficiente y debe ser una prioridad para la recuperación y el desarrollo de América Latina y el Caribe. La crisis climática, la COVID-19 y todos los demás desafíos humanitarios han empeorado aún más la situación de las jóvenes mujeres frente a sus posibilidades de volver a estudiar, encontrar un trabajo de calidad y tener una vida saludable y acceso a servicios de salud apropiados. La ya desproporcionada carga del trabajo de cuidados no remunerados para las jóvenes madres se hizo más pesada. Para las mujeres jóvenes que experimentan múltiples formas de discriminación, por motivos de clase social, discapacidad, raza, etnia, orientación sexual e identidad de género o situación migratoria, los obstáculos a su inclusión son aún mayores. Para abordar estos complejos desafíos de las desigualdades de género y modificar las barreras estructurales para promover la igualdad de todas las mujeres jóvenes, hay que ser mucho más sofisticados en el análisis de los obstáculos que perpetúan estas discriminaciones y en todas las recomendaciones anteriores hay que proponer políticas específicas para fomentar la inclusión de las jóvenes latinoamericanas.

Referencias Bibliográficas

Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). (2023). Educación terciaria

Arreaza, A., Berniell, L., de la Mata, D., Levy, S. & Schargrodsky, E. (2023, September). Retos de la política social en América Latina y el Caribe: análisis y políticas. Caracas: CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Retrieved from <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2102>

Auricchio, B. (2023). El sector educativo en América Latina desde una perspectiva de género. Caracas: CAF. Retrieved from <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2044>

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2019). El futuro ya está aquí. Habilidades transversales en América Latina y el Caribe en el siglo XXI

Banco Mundial (2021). Colombia. Notas Sectoriales de Políticas. Educación.

Banco Mundial (2021a). Cuando tengamos sesenta y cuatro: Oportunidades y desafíos para la política pública en un contexto de envejecimiento poblacional en América Latina y el Caribe. El desarrollo internacional bajo la lupa. Washington

Banco Mundial (2022). Construyendo Sistemas de Salud Resilientes en América Latina y el Caribe: Lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19. Washington

Banco Mundial (2023). Base de datos en línea. https://data.worldbank.org/indicador/IT.NET.USER.ZS?name_desc=false&locations=ZJ. Accesado el 16 de junio 2023

Banco Mundial (2023). Colapso y recuperación: Cómo la pandemia de COVID-19 erosionó el capital humano y qué hacer para recuperarlo. Washington

Berniell, L., de la Mata, D., Bernal, R., Camacho, A., Barrera-Osorio, F., Álvarez, F., ... Vargas, J. (2016). RED 2016. Más habilidades para el trabajo y la vida: los aportes de la familia, la escuela, el entorno y el mundo laboral. Bogotá: CAF. Retrieved from <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/936>

Berniell, L., Díaz, B., Estrada, R., Hatrick, A., Llambí, C., Maris, L., & Singer, D. (2021, August 17). Políticas para reducir las brechas educativas en la pospandemia. Caracas: CAF. Retrieved from <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1773>

CAF (2021). Encuesta CAF: Movilidad intergeneracional en América Latina. (2022, March). Caracas. Retrieved from <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1985>

Celhay, P. A., y Gallegos, S. (2023, July 27). Educational Mobility Across Three Generations in Latin American Countries. Caracas: CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1906>

Ciaschi, M., Gasparini, L., & Neidhöfer, G. (2021, December 16). Movilidad ocupacional en América Latina. Caracas: CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1846>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2017). Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo. Santiago

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2018). Hacia una agenda regional de desarrollo social inclusivo: bases y propuesta inicial. Santiago

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2021). Caja de herramientas. Promoviendo la igualdad: el aporte de las políticas sociales en América Latina y el Caribe. Santiago

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2021a). Promoviendo la igualdad.

El aporte de las políticas sociales en América Latina y el Caribe. Santiago

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2022). Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2022. Santiago

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2022a). Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. Disponible en: <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=es>. Accesado el 12 de junio 2023

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2022b). Informalidad laboral en América Latina: propuesta metodológica para su identificación a nivel subnacional. Santiago

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2022c). Inclusión laboral de las personas jóvenes en América Latina y el Caribe en tiempos de crisis: desafíos de igualdad para

las políticas públicas. Santiago

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y Organización de los Estados Americanos (CICAD). (2019). Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019. Washington

Corporación Andina de Fomento (CAF). (2016). Más habilidades para el trabajo y la vida: los aportes de la familia, la escuela, el entorno y el mundo laboral. Bogotá

Corporación Andina de Fomento (CAF). (2021). Hacia una agenda integral de la adopción de tecnologías para el aprendizaje 4.0 en América Latina. Caracas

Corporación Andina de Fomento (CAF). (2023). El sector educativo en América Latina desde una perspectiva de género. Caracas

De La Mata, D., Berniell, L., Schargrotsky, E., Álvarez, F., Arreaza, A., & Alves, G. (2022). Desigualdades heredadas. El rol de las habilidades, el empleo y la riqueza en las oportunidades de las nuevas generaciones. Caracas. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1981>

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. (2019). The State of Food Security and Nutrition in the World 2019. Safeguarding against economic slowdowns and downturns. FAO, Roma.

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2019). 165 millones de razones: Un llamado a la acción para la inversión en adolescencia y juventud en América Latina y el Caribe.

Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). (2018). Jóvenes con discapacidad: estudio global sobre cómo poner fin a la violencia de género y hacer realidad la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). (2020). Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina y el Caribe.

Gasparini, L., Laguinde, L., Ciaschi, M., & Guido Neidhöfer. (2021, December 7). Igualdad de oportunidades educativas: un indicador sencillo para América Latina. Caracas: CAF. Retrieved from <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1834>

Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UIS.stat). (2023). Base de datos en línea. Disponible en: <http://data.uis.unesco>.

org/. Accesado el 15 de junio 2023

International Labour Organization (ILO). (2020). Renewing Commitment to Youth Employment by Endorsing a Follow-up Plan of Action on Youth Employment for the Period 2020–30. GB.340/POL/2.

International Labour Organization (ILO). (2022) Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people. Geneva

Juvelac. (2019). Observatorio de Juventud para América Latina y el Caribe. <https://dds.cepal.org/juvelac/educacion>. Accesado el 10 de junio 2023

López-Gómez, A., Graña, S., Ramos, V. y Benedet, L. (2021). Desarrollo de una política pública integral de prevención del embarazo en adolescentes en Uruguay. Revista Panamericana de Salud Pública. Publicación de Naciones Unidas. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.93>

Naciones Unidas (2022). Transforming education: an urgent political imperative for our collective future. Vision statement of the Secretary-General on transforming education. Nueva York
Naciones Unidas (2023). Base de datos en línea sobre el monitoreo de los ODS. <https://agenda2030lac.org/estadisticas/indicadores-priorizados-seguimiento-ods.html>. Accesado el 16 de junio 2023

Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. (2016b). Report on the World Social Situation. 2016. Leaving no one behind: the imperative of inclusive development. Nueva York

Naciones Unidas, Grupo de trabajo sobre juventud de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe. (2022). Segunda Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19: informe de resultados. Santiago

Naciones Unidas. (2020). Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia de la COVID-19. Publicación de Naciones Unidas

Neidhöfer, G., Ciaschi, M., & Gasparini, L. (2021, December 15). Intergenerational mobility in education in Latin America. Caracas: CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1845>

ONU, Cepal. Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean (2022). Child, early and forced marriages and unions deepen gender inequalities

Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ). (2018). Emprendimiento Juvenil en Iberoamérica. Una clave para la empleabilidad. Madrid

Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ). (2018a). Pacto Iberoamericano de Juventud. Madrid

Organización Internacional del Trabajo (2020). Los jóvenes y la COVID-19. Efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021). Panorama Laboral 2021. Ginebra

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2022). Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people. Geneva

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2022a). Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2023

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2022b). La OIT lanza iniciativas sobre empleos verdes para los jóvenes y herramientas de financiación para la transición justa en la COP27. 11 de noviembre 2022

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2017). Estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el adolescente (2016-2030). Publicación de Naciones Unidas

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2006). Alcohol y la salud de los pueblos indígenas.

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2018). La salud de los adolescentes y jóvenes en la Región de las Américas: la aplicación de la estrategia y el plan de acción regionales sobre la salud de los adolescentes y jóvenes (2010-2018). Washington

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe (PNUD). (2023). Building safe spaces for trans people in Haiti. Exposure. 9 de marzo 2022.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2023). Informe sobre desarrollo humano 2021/2022

Sanhueza A, Carvajal-Vélez L, Mújica OJ, Vidaletti LP, Victora CG y Barros AJD. (2022). Desigualdades relacionadas con el ODS 3 en la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes: línea de base para el monitoreo de los ODS en América Latina y el Caribe por medio de encuestas transversales nacionales. *Rev. Panam Salud Pública*. 46:e100. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.100>

Santoro, E. (2021). “Nuestra decisión”, una herramienta digital con perspectiva de género. Página12. 2 de abril 2021

SEDLAC (2022). Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales y Banco Mundial (2022).

Székely, M. (2015): “Tendencias educativas en América Latina. Segundo estudio suplementario del Plan de Aprendizaje para el Programa “Nuevos Empleos y Oportunidades” (NEO)”. Ciudad de México.

Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe. <https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/>. Accesado el 12 de junio 2023

Tobar, H., Carrasco Muro, C., Rolando, P., & Gerbasi, N. (2022). Cuaderno del Desarrollo 10 - Inclusión en la gestión del Estado. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2014>

UNDP, Human Development Report Office. (2013). Capabilities and Human Development: Beyond the individual—the critical role of social institutions and social competencies.

Unesco (2019). Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2019: Migración, desplazamientos y educación: construyendo puentes, no muros

Unesco (2021). Panorama continental. Mapeando los marcos de monitoreo de América Latina y el Caribe en el ODS 4.

Unicef —Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2022). Estado Mundial de la Infancia 2021: En mi mente: Promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia. Nueva York

Unicef —Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (2023a). Plan 12. Aprender para transfor-

